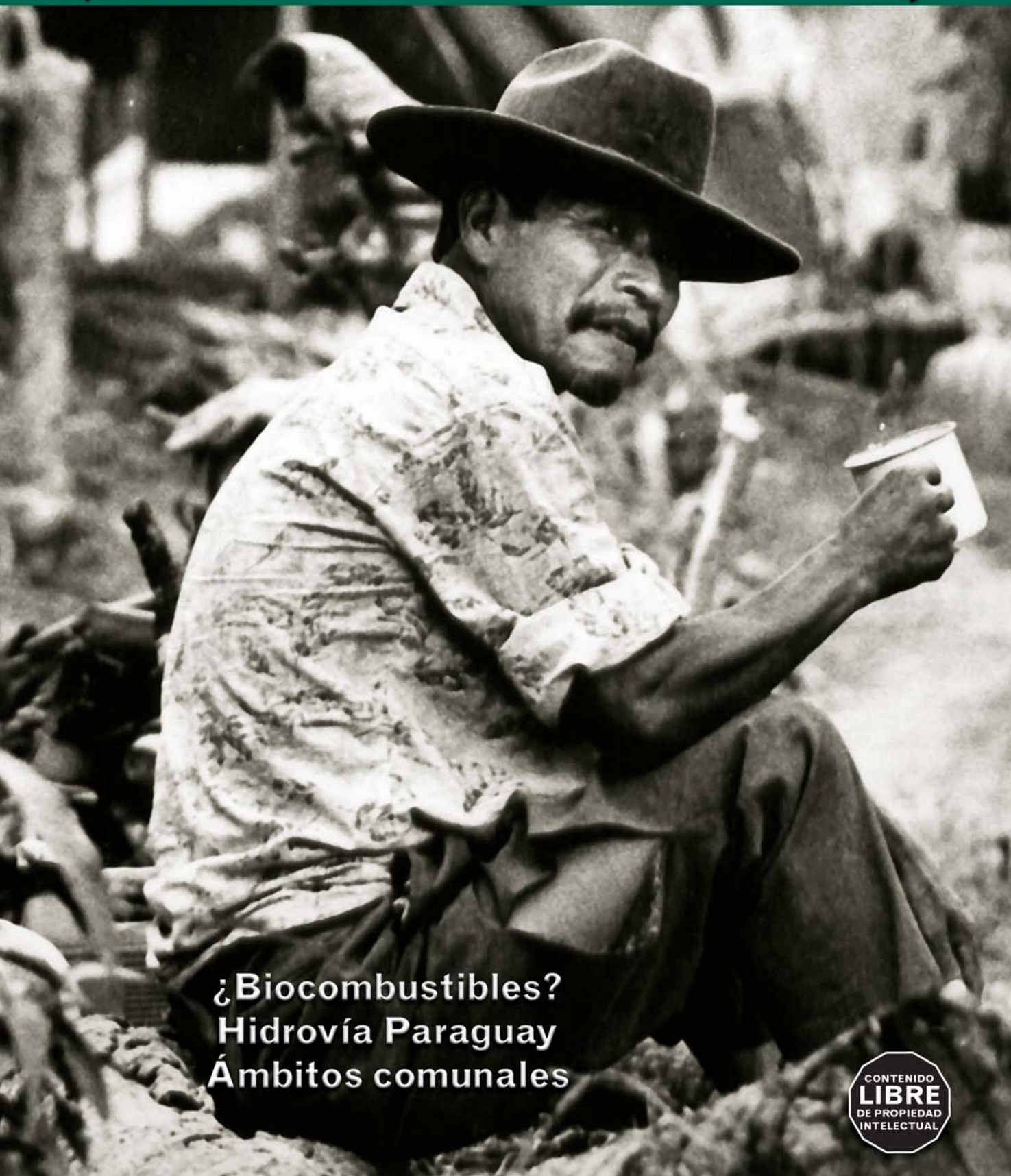


abril de 2007

52

BIODIVERSIDAD

SUSTENTO Y CULTURAS



¿Biocombustibles?
Hidrovía Paraguay
Ámbitos comunales



Biodiversidad, sustento y culturas, un proyecto conjunto de REDES-AT y GRAIN, es una publicación trimestral de información y debate sobre la diversidad biológica y cultural para el sustento de las comunidades y culturas locales. El uso y conservación de recursos genéticos, el impacto de las nuevas biotecnologías, patentes y políticas públicas son parte de nuestra cobertura. Incluye experiencias y propuestas en América Latina, y busca ser un vínculo entre quienes trabajan por la gestión popular de los recursos genéticos, especialmente las comunidades locales: mujeres y hombres indígenas y afroamericanos, campesinos, pescadores y pequeños productores.

Comité editorial

Carlos Vicente carlos@grain.org
Karin Nansen biodiv@redes.org.uy

Consejo asesor

Elizabeth Bravo, Acción Ecológica, Ecuador
Ciro Correa, MST, Vía Campesina
Freddy Delgado, Agruco,
Universidad Mayor de San Simón, Bolivia
Aldo González, México
Magda Lanuza, Nicaragua
Camila Montecinos, Chile
Silvia Ribeiro, Uruguay
Silvia Rodríguez, Costa Rica
Germán Vélez, Programa Semillas,
Colombia

Editora

Carmen Améndola[†]

Edición

Ramón Vera Herrera
constelacion@laneta.apc.org

Diseño y formación

Adriana Cataño/Alfavit



REDES-AT (Red de Ecología Social)
Amigos de la Tierra
San José 1423,
11200 Montevideo, Uruguay
Tels. (598 2) 902 2355/908 2730
Fax. (598 2) 908 2730



ONG internacional
con sede en Barcelona

Su política institucional es la autoría colectiva de sus artículos y la mayoría de sus publicaciones (citar como GRAIN).

Girona 25, pral.
E-08010, Barcelona, España
Tel. (34-93) 3011381
Fax. (34-93) 3011627
<http://www.grain.org>

Impreso y encuadernado en ZONALIBRO
Gral. Palleja 2478
Tel. 208 78 19
zonalibro@adinet.com.uy

Depósito Legal núm. 340.492/07
Edición amparada en el decreto 218/996
(Comisión del Papel)
ISSN: 07977-888X

| | |
|---|----|
| EDITORIAL | 1 |
| ¿Ámbitos comunes? | 2 |
| El clamor por bienes y entornos comunes | 3 |
| El silencio es un bien comunal | 8 |
| A quién beneficia el negocio de los biocombustibles | 12 |
| DE UN VISTAZO Y MUCHAS ARISTAS | |
| La fiebre por biocombustibles y sus impactos negativos | 16 |
| ATAQUES, POLÍTICAS, RESISTENCIA, RELATOS | 21 |
| minerales y guerra en el Congo Costa Rica y el TLC especulación maicera en México ¿soya transgénica en Venezuela? Paraguay y los servicios ambientales la policía de las semillas ¿arroz humanoide? la guerra del glifosato Nyéléni y la soberanía alimentaria nueva generación de biopiratas | |
| Los desastres que vienen por la Hidrovía Paraguay-Paraná | 28 |
| La investigación científico-campesina en la agricultura cubana | 31 |
| HERRAMIENTAS | 35 |
| bienes comunes y saberes locales ingeniería genética extrema monopolios artificiales | |

Todos los dibujos que acompañan el número son de Diego Rivera, artista mexicano (1886-1957), elaborados en diferentes épocas como ilustraciones para libros diversos. En ellos, las luchas sociales, el espíritu revolucionario, la celebración de la vida y el trabajo campesinos, se funden abriendo espacios y tiempos comunitarios. Una muestra abarcativa de sus dibujos puede hallarse en el excelente libro *Diego Rivera, ilustrador*, Secretaría de Educación Pública, México, 1986.

Las fotos que presentamos son muestras del trabajo campesino y fueron tomadas por Jesús Quintanar en el estado de México, Jerónimo Arteaga en la Huasteca potosina y Jorge Acevedo en Oaxaca. En cada foto o serie, el crédito identifica la autoría particular.

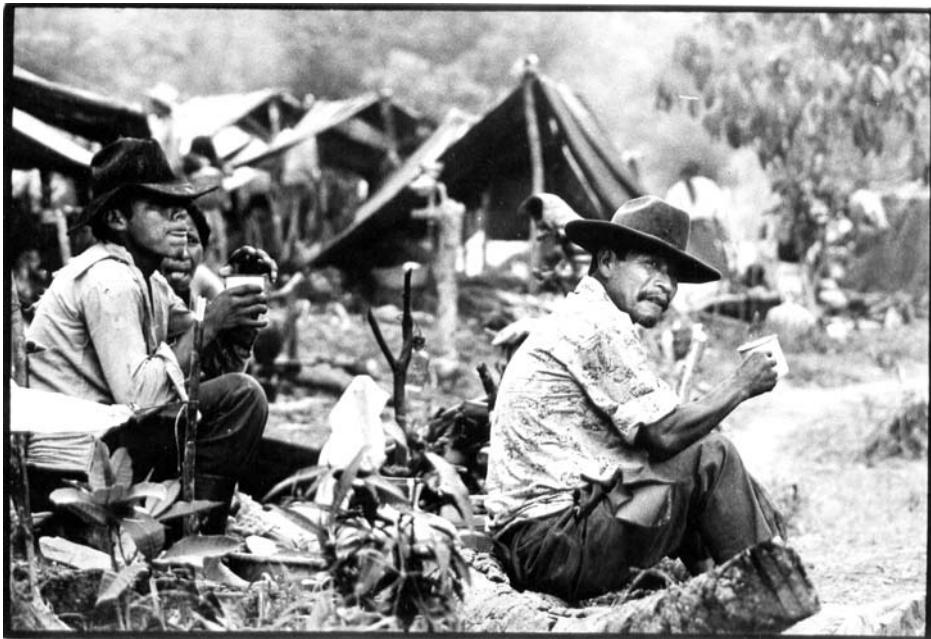
Las organizaciones populares y las ONG de América Latina pueden recibir gratuitamente la revista. Contactar a REDES-AT: biodiv@redes.org.uy/biodiv.suscripciones@redes.org.uy

Les invitamos a que nos envíen colaboraciones, remitidas al comité editorial para su consideración. Los artículos firmados son de entera responsabilidad de sus autores. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente. Por favor enviémos una copia para nuestro conocimiento.

Agradecemos la colaboración de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza (Sveriges Naturskyddsförening) y al Fondo de Biodiversidad, Holanda.

¿Argentina, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Centroamérica, México? ¿Quiénes son estos hombres que beben algo caliente, café soluble o yerbaluisa, té de monte o un trago de agua mientras las mujeres prenden fuegos y se afanan entre los toldos improvisados donde permanece el grupo? ¿Son desplazados por las denominadas autodefensas colombianas (esos paramilitares que a sueldo atropellan, matan y siembran el terror), o tal vez gente que huye de las fumigaciones con glifosato en la selvática frontera ecuatoriana con Colombia? ¿O por las agroindustrias que con mañas se apoderaron de sus tierras? ¿Acaso son refugiados de las guerras de contrainsurgencia centroamericanas de los ochenta? ¿O jornaleros exiliados, semiesclavos en algún aldeaño verde y turbio mar de soja transgénica en la profundidad de Paraguay, Argentina o la Bolivia santacruceña? ¿Gente sin tierra en algún remoto rincón brasileño? ¿Mexicanos corridos por las invasiones ganaderas y del narco hacia algún campo de cultivo transnacional dentro del propio México?

I



No tenemos datos de la foto. Ni dónde ni cuándo se tomó, ni quién atestiguó de primera mano esas miradas fijas en un horizonte invisible. Un horizonte que sigue ahí. Sea cual sea su vida, su valentía los hizo viajar para volver a ser, aunque sea fugazmente. Y aunque enajenen su futuro en esa apuesta, el sinsentido pesa más y hay que romperlo, por eso arriesgan todo para sentir, por lo menos en la familia o en la comunidad improvisada que forman con otros destituidos, que están vivos y que hay esperanza.

El embate es más fuerte que nunca, es más vasto y brutal, más cohesionado. Pero los pueblos saben que nunca está todo perdido. Y reflexionan en colectivo, se organizan y comienzan a entender lo que pesa y cómo darle la vuelta. Y más temprano que tarde los proyectos autogestionarios, comunitarios, autonómicos, comienzan a dar respuestas puntuales en lo cotidiano de los espacios que con la lucha siembran y hacen florecer los grupos, los pueblos, la gente, la comunidad.

Sirva esta foto anónima, de seres sin nombre, como acicate a la memoria. Como manera de mantener viva la vida que, acuclillada y con un pocillo de peltre en la mano, sigue viendo el futuro desde cada rincón de un continente americano más y más insumiso.

¿Ámbitos comunes?

2

En un mundo más y más privatizado, donde empresas y gobiernos se apropian de más y más ámbitos comunes, entre ellos el lenguaje que en manos del poder nos falsea la realidad, es vital discutir qué entendemos por ámbitos o entornos comunes o comunales, bienes comunes, patrimonio común, o los *commons* —ese antiguo y a veces no bien entendido término medieval.

Cuál es el significado de su “confinamiento”, de su apropiación en manos privadas. Qué significan los actuales intentos por emprender una defensa “global” de *commons* sometiéndolos a estrategias de propiedad “colectiva” o “común”, como el Sky Trust, las reservas de la biósfera, o los proyectos de emprender un muestreo genético de la población mundial en aras de “preservar” el “patrimonio común de la humanidad”.

¿Por qué olvidamos que las sociedades anónimas, corazón del capitalismo, son su propuesta más acabada de colectivizar la propiedad? Mientras hablemos de propiedad, sea del mercado o del Estado, no rompemos el confinamiento de los ámbitos comunes.



Ésa es la discusión. Por eso debemos subrayar que los ámbitos comunales o entornos y bienes comunes **son relaciones, no cosas**. El confinamiento de los ámbitos comunales no sólo los roba al privatizarlos: hace que la gente los perciba como riqueza, y como mercancía, y acepte que otros decidan su destino —su utilización, su explotación, su manejo monetario o su devastación.

Los ámbitos comunes han sido siempre base de lazos sociales respetuosos. Al secuestrar estos ámbitos, nuestras relaciones quedan sometidas a la voluntad del mercado o del Estado. La antigua integralidad de producción-satisfacción de necesidades se rompe también y se vuelve trato comercial entre productores y consumidores, o dádiva no siempre desinteresada por parte del Estado. En ese momento, se nos roba la libertad de ser constructores de nuestras relaciones. La comunidad no es sino la construcción colectiva, **común**, de los fines y modos de nuestras relaciones humanas y con la naturaleza. Ningún interés privado, sea individual o colectivo, puede estar por encima de esta libre construcción común.

Presentamos dos esclarecedores textos. El primero apareció en *Seedling* en octubre de 2006, como colaboración entre Brewster Kneen y el equipo de GRAIN. El segundo es la reflexión de uno de los más importantes y lúcidos pensadores de nuestra época, Iván Illich (1926-2002), pionero de la sociedad civil en su sentido contemporáneo y sin duda profeta de cómo el capitalismo devastará el mundo, la vida y nuestra comunidad, si lo dejamos. Lo sorprendente es que hoy su alegato, expresado en Japón durante el simposio La Ciencia y el Hombre en marzo de 1982, es más actual y pertinente que entonces.

El clamor por bienes y entornos *comunes*

Brewster Kneen y GRAIN

3

La privatización penetra nuestras vidas cada vez más profundamente, pero al mismo tiempo parece que hoy en día todo es proclamado como “patrimonio común” (es decir, algo a lo que todo el mundo —o todo el mundo en determinado contexto— tiene derecho a acceder): agua, aire, semillas e incluso alimentos, salud y educación. Es un concepto muy popular, al menos en el mundo angloparlante [donde se le conoce como *commons*, es decir, bienes y entornos *comunes*, o del común o la comunidad]. La moda de “recuperar los bienes comunes” responde en parte al esfuerzo de luchar contra la privatización, y eso es bueno. Pero si el movimiento por el reconocimiento y construcción de nuevos bienes o patrimonios *comunes* maneja el concepto con descuido, podría llegar incluso a facilitar su privatización. Es particularmente importante distinguir *común* de *público*, y recordar que el patrimonio común, o los bienes y entornos *comunes* están supestandamente asociados a comunidades.

La noción de *bienes comunes* es a la vez familiar e intrigante. Aun cuando los sistemas de uso comunitario del suelo son una práctica corriente desde hace mucho tiempo, el término *commons* evoca imágenes de Inglaterra o Gales en el medioevo, cuando a determinadas superficies o terrenos se los reconocía como *comunes* o de la comunidad. Esos lotes *comunes* eran espacios abiertos, sin cercas, disponibles colectivamente para el pastoreo, la pesca, la recolección de leña, forraje y demás. Las personas que dependían de su uso eran conocidas como *comuneros*. Los lotes comunes no eran necesariamente tierras de dominio público. Muchos eran de propiedad privada de la aristocracia que sustituyó a los señores feudales. Otros simplemente no tenían dueño. Quién podía usarlos, y cómo, estaba estrictamente reglamentado con base en el derecho consuetudi-

nario. Básicamente, esos bienes y entornos *comunes* estaban directamente asociados a una comunidad (generalmente vinculada a una parroquia o una aldea) cuyos miembros eran los únicos que podían hacer uso de ellos, se los administraba colectivamente, lo que no necesariamente quiere decir equitativamente o sin arreglo a un orden jerárquico, se los asociaba a determinados “recursos” naturales, cuyo uso y acceso estaba reglamentado por una serie de derechos y responsabilidades.

Los antiguos lotes o campos *comunes* de Inglaterra fueron desmantelados a través de un largo proceso de “confinamiento”, mediante el cual la aristocracia se apoderó de tierras que habían sido de uso de la comunidad desde hacía mucho tiempo, cerrándolas con muros o cercas, transformándolas así en tierras de uso privado y para fines comerciales. Eso trajo aparejada una especialización de las fincas (por ejemplo, para la cría de ovejas), mayor concentración de la tierra en haciendas más grandes y, con el tiempo, todo el tren de la revolución industrial. Pero además despojó a los comuneros de su sustento y sus medios de vida. La “tragedia de los comunes”, una frase desprestigiada por Garret Hardin (un académico estadounidense que en 1968 escribió un artículo muy polémico sobre el tema, titulado “The Tragedy of the Commons”), no fue el agotamiento de los recursos naturales en esos entornos *comunes*, sino que el desmantelamiento de esos entornos *comunes* generó pobreza e inseguridad, dando así a luz a una nueva clase de familias rurales desposeídas, forzadas a transformarse en mano de obra asalariada barata en las nuevas fábricas y ciudades emergentes. (Esta tragedia se ha repetido de muchas maneras en muchos países, y continúa repitiéndose brutalmente hasta el día de hoy).

Traducción:
Alberto Villareal

Qué se entiende por bienes o entornos *comunes* (*commons*, o patrimonio común) es algo que ha evolucionado bastante desde los siglos XVIII y XIX hasta la fecha. A veces se lo considera como un concepto anglosajón, sin equivalencias o fácil traducción en muchos otros idiomas y culturas. (En América Latina, por ejemplo, el término *comunes* no tiene sentido [como sustantivo traducido literalmente del inglés], a pesar que los pueblos indígenas de la región poseen una historia muy rica con muchos tipos de sistemas colectivos distintos). Pero con el paso del tiempo se lo ha reinterpretado de maneras tan diversas, que hoy en día es justo decir que no existe una clara e inequívoca definición de su significado.

Hay dos elementos que parecen haberse esfumado de la noción y la lucha por el patrimonio común y los bienes o entornos comunes como defensa contra la privatización: su asociación a la mismísima idea o concepto de comunidad, y la posibilidad de imaginar y establecer relaciones distintas a la de propiedad.

Los bienes comunes hoy. Hoy en día mucha gente aboga por la idea de los bienes o entornos *comunes*, o patrimonio común. Se habla de las “comunidades digitales”, o del “entorno digital común” o “ciberespacio común”, por ejemplo, es decir, la convicción de que la información disponible en la Internet debe permanecer libre de barreras que entorpezcan su empleo y circulación. El agua es a menudo descrita como un “bien común”, toda vez que se plantea un nuevo proyecto de privatización del suministro de agua potable. Hace algunos años se lanzó una iniciativa para un tratado que defina el acervo genético —el ADN mundial— como “patrimonio común de la humanidad”. Se publican todo tipo de escritos al amparo de las licencias de Creative Commons, un “entorno común para la innovación y el trabajo creativo” que desafía las restricciones que imponen las normas sobre

derechos de autor. Cualquier frontera susceptible de “nuevos confinamientos” derivados del avance de la tecnología o cambios en la legislación —los océanos, el espacio sideral, el genoma humano, los sistemas de educación pública o estatal y hasta los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas— es hoy bautizado de apuro como “patrimonio común”, o entorno o bien “común”.

¿Qué significa esto? Aunque da la impresión de ser un movimiento coherente de resistencia a la privatización y el capitalismo neoliberal, ciertamente no lo es. El Banco Mundial, George Soros y otros partidarios del “acceso libre” o “acceso abierto”, la Fundación Ford y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) se cuentan entre los muchos que estudian, fomentan o apoyan iniciativas asociadas a distintos tipos de los así llamados bienes o entornos “comunes”. La confusión ideológica que todo esto implica puede socavar en los hechos el trabajo de los movimientos sociales que procuran apuntalar en manos de las comunidades el control de la biodiversidad; esa confusión ideológica puede también reforzar un significado de los bienes *comunes* o patrimonio común, contrario al que los movimientos sociales le dan. De ahí la necesidad de un análisis más aguzado y crítico de estas nuevas corrientes.

¿Privatizadores encubiertos? El concepto de patrimonio común —o bienes y entornos *comunes*— evidentemente significa cosas distintas para diferentes personas. Para algunos tiene que ver sobre todo con la propiedad en común —es decir, cómo se puede administrar colectivamente la propiedad. Para otros, especialmente del ámbito de las activistas y las campañas, el “patrimonio común” y los bienes o entornos “comunes” parecen suplir la falta de una esfera “pública” crecientemente debilitada. Sea como sea, ambos enfoques, aunque bastante contrastantes y contradictorios, pueden en los hechos respaldar la privatización.



Foto: Jesús Quintanar

En el antiguo sistema inglés, la propiedad común o colectiva no era más que una de las modalidades de los *entornos comunes* o *commons*. Para gran parte de la “comunidad” académica que los promueve actualmente, los bienes “comunes” no deberían ser otra cosa que la propiedad colectiva. En su cruzada a favor de los bienes o entornos “comunes”, el régimen de propiedad constituye el cimiento de cualquier empresa o relación promovida y respaldada por esas “comunidades” académicas —digamos, por ejemplo, un programa de pesca sustentable— y su meta es lograr eficiencias a través del manejo colectivo. ¡A los bancos de desarrollo les calza perfecto! Aunque los planificadores del desarrollo fundamentalistas neoliberales prefieren y fomentan de hecho los derechos de propiedad individuales antes que los colectivos, en realidad es lógico que acepten sin mucho reparo los sistemas de propiedad en común, que son básicamente propiedad privada colectiva. Toda la apuesta política a favor de los servicios ambientales promovidos por el Banco Mundial y otros —donde los mecanismos de mercado se amalgaman con mecanis-

mos de administración participativa— responde a esa misma lógica.

Debido a las restricciones crecientes que hoy en día le impone la propiedad intelectual a la investigación científica, dificultándola, muchos científicos proponen también diversos tipos de bienes o entornos “comunes”. Un buen ejemplo de ello es el “ciberespacio común protegido” que fomenta CAMBIA, una organización de investigación biotecnológica de Australia que está en campaña por la “ciencia libre” o “ciencia abierta” (*open source science*). En el ciberespacio común protegido de CAMBIA, los científicos acceden a “una plataforma [electrónica] segura donde pueden discutir invenciones o mejoras, sin quedar invalidados por solicitudes de patente ulteriores”. En otras palabras, generan un entorno donde los científicos pueden trabajar colaborando mutuamente, sin afectar los derechos de propiedad privada de nadie. No se cuestiona en modo alguno la privatización de la investigación, simplemente permite que haya un poco más de colaboración entre los científicos.

Las organizaciones sociales y los activistas, por su parte, generalmente en-

Para profundizar

(Hay tantas iniciativas asociadas a los bienes y entornos *comunes* hoy en día, que la siguiente lista sólo da una idea general de lo que existe)

Sitios electrónicos:

Asia Commons
The Commoner
On the Commons
The Forum on Privatization and the Public Domain

Artículos:

George Caffentzis, "A Tale of Two Conferences: Globalization, the Crisis of Neoliberalism and the Question of the Commons, <http://www.globaljusticecenter.org/papers/caffentzis.htm>, agosto de 2004

John Hepburn, "Reclaiming Commons — Old and New", <http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=8739>, 15 de septiembre de 2005.

"Underneath the Knowledge Commons, *Mute*, vol. 2, núm. 1, 2005. <http://www.metamute.org/en/Underneath-the-Knowledge-Commons>

Olivier de Marcellus, "Who made this Movement? Commons, Communities and Movements: Inside, Outside and against Capital", *The Commoner*, 2003. <http://www.commoner.org.uk/demarcellus06.pdf>

tienen el "patrimonio común" y los bienes o entornos "comunes" como una especie de ave fénix que se levanta de las cenizas de las instituciones públicas crecientemente debilitadas. El eje principal de esa lucha es garantizar derechos de acceso y el derecho a compartir —a menudo abanderando algún tipo de "interés público" o "interés común" generalmente poco o mal definido— en un mundo en el que parece que todo está siendo transformado en propiedad privada. Mas este enfoque también puede contribuir, de hecho, a la privatización. Por ejemplo, en lugar de eliminar los excluyentes derechos de autor, la iniciativa de Creative Commons de un "sistema flexible de derechos de autor para el trabajo creativo", los eleva a un nuevo nivel de aceptación social supuestamente más a tono con la tecnología (Internet) y el temperamento (favorable a compartir y colaborar) contemporáneos. Aunque desde el punto de vista jurídico las licencias de Creative Commons sí promueven el compartir en una era de crecientes restricciones impuestas por los derechos de autor, esas licencias también refuerzan todo el andamiaje del sistema de derechos de autor fundado en la propiedad.

Otros más abogan por bienes o entornos "comunes" sin límites ni reglas, ni criterios acerca de quién puede participar y cómo, tal como ocurrió con la iniciativa para compartir el "patrimonio genético común". Los bienes o entornos "comunes" pobremente o mal definidos pueden representar un cheque en blanco para los privatizadores que pueden acceder así a bienes o entornos y territorios que serían de acceso libre o abierto para todo el mundo, facilitando de ese modo lo que se pretendía impedir al proclamarlos. Si la Amazonía brasileña fuese declarada "patrimonio común de la humanidad" en función del argumento válido de que todo el mundo se beneficia del servicio que presta como pulmón del planeta (siempre y cuando no se la talle), ¿significaría eso que la empresa Monsanto sedienta de patentes tendría el mismo derecho a sus tesoros que los kayapó? Por supuesto que no debería ser así, pero a eso es a lo

que pueden llevar las exhortaciones vagas en pos de bienes o entornos "comunes" o el "patrimonio común", al igual que las definiciones pocos claras del "interés público" o "interés común". En la lucha por impedir la privatización y la apropiación, es imprescindible hacer conciencia de todos los caminos que conducen a ella.

La confusión reinante entre "público" y "común" —y en torno al significado mismo de lo "público"— es muy grande y grave. Históricamente, lo público (como cuando se habla de la educación pública o de una plaza pública) ha representado aquello que fue preservado fuera o arrancado del control privado tras largos procesos de lucha social y colocado bajo la jurisdicción del Estado, para el disfrute o al servicio de todos. Esto se hacía suponiendo que los Estados tienen la responsabilidad y la capacidad de velar por y asegurar el bienestar de la población en su conjunto. El neoliberalismo destruye esto. Ahora hay Estados que son agentes muy activos de la privatización, ya sea mediante licitaciones públicas, concesiones, tercerizaciones o a través de la legislación. Si "público" significa "estatal" (bajo control del Estado), la práctica actual de los Estados neoliberales demuestra, en su modalidad más extrema, que no existe ninguna garantía de que el pueblo se verá beneficiado. Muy por el contrario: el control estatal puede ser un factor clave en el mantenimiento o agravamiento de la inequidad y la injusticia. No debemos olvidar que muchos de los recursos naturales que los Estados —y de hecho, muchos de los ciudadanos— consideran "públicos", fueron arrebatados violentamente de las manos de los pueblos indígenas o generados a partir de ese saqueo.

De modo que lo "público", o los bienes y espacios o entornos "públicos" no son de ninguna manera equiparables a los bienes y espacios o entornos "comunes" o al "común", aunque lo "público" forme aún hoy parte de nuestro imaginario y realidad social. Lo "público" es de alcance universal: se supone que toda la ciudadanía tiene derecho a

beneficiarse de aquello que es público. El *común* y los bienes o entornos *comunes*, por contraste, siempre fueron históricamente creados o contruidos por y para comunidades específicas. Si la historia ha de servirnos como lección, es imperativo reconocer que hoy en día la palabra “público” es crecientemente utilizada por los Estados para

Si la lucha por el control social de las semillas, el agua y otros bienes esenciales no está anclada en comunidades bien definidas, corremos el riesgo de fomentar el tipo de “libertad de acceso abierto para todos” que termina conduciendo a la postre a su (sobre)explotación y privatización.



Foto: Jorge Acevedo

ponerse al servicio del mercado y su agenda de prioridades.

Es imprescindible mayor claridad. Es necesario examinar mucho más detenidamente la idea de bienes o entornos *comunes* hoy en día, y tener más en cuenta lo que persiguen los movimientos sociales a través de diversas campañas e iniciativas para (re)establecer sistemas de control popular de las semillas, los bosques y selvas, las zonas costeras, los medios de comunicación y muchos servicios públicos vitales. Si observamos retrospectivamente la historia de los *commons* en Inglaterra (que no quiere decir ni sugerir que los ingleses hicieron todo bien), hay dos elementos que parecen haberse esfumado de la noción y la lucha por el *patrimonio común* y los bienes o entornos *comunes* como defensa contra la privatización: su asociación a la mismísima idea o concepto de comunidad, y la posibilidad de imagi-

nar y establecer relaciones distintas a la de propiedad.

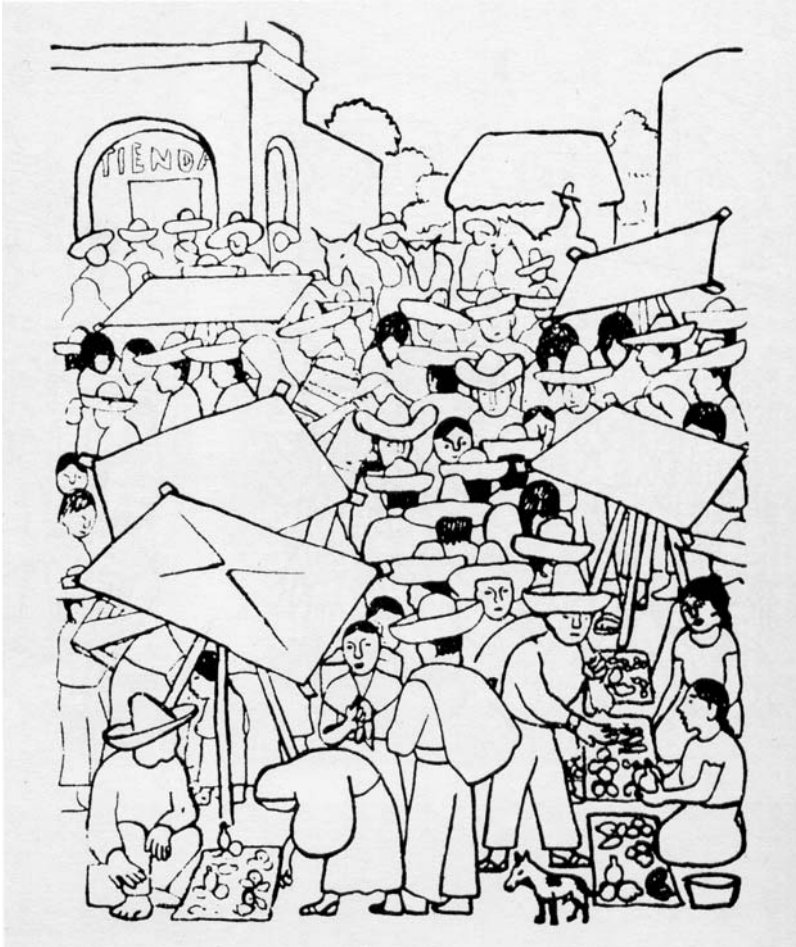
Si la lucha por el control social de las semillas, el agua y otros bienes esenciales no está anclada en comunidades bien definidas, corremos el riesgo de fomentar el tipo de “libertad de acceso abierto para todos” que termina conduciendo a la postre a su (sobre)explotación y privatización. Y si no buscamos anclajes distintos y por fuera del cajón de la propiedad privada excluyente, corremos el riesgo de promover el programa de prioridades de la ofensiva neoliberal predominante.

La lucha por el *patrimonio común* y por bienes y entornos *comunes* como movimiento de resistencia contra la privatización merece apoyo crítico. Como parte de esa lucha, sin embargo, es imprescindible esclarecer más nítidamente por qué estamos luchando, y tener mucho más presentes las trampas que se esconden en nuestro camino. ❖

El silencio es un bien comunal

Iván Illich

8



Ya se aprecia claramente que las máquinas que imitan al hombre están usurpando todas las facetas de la vida cotidiana y que tales máquinas están forzando a la gente a comportarse como ellas. Los nuevos dispositivos electrónicos tienen el poder de forzar a la gente a “comunicarse” entre sí y con éstos en términos de la máquina. Aquello que estructuralmente no se adapte a la lógica de las máquinas es efectivamente depurado de una cultura dominada por su utilización.

El comportamiento maquinal de la gente encadenada a la electrónica constituye una degradación de su bienestar y su dignidad, lo cual, para la gran mayoría y a largo plazo, se tornará intolerable. Observar el efecto enfermante de los ambientes programados demuestra que en ellos las personas devienen insolentes, impotentes, narcisistas y apolíticas: el proceso político se resquebraja debido a que la gente deja de ser capaz de gobernarse a sí misma y exige ser conducida.

Japón es tenido por la capital de la electrónica; sería maravilloso si se tornase, para todo el mundo, en el modelo de una nueva política de autolimitación en el área de las comunicaciones, lo que, en mi opinión, será de aquí en adelante muy necesario si un pueblo desea mantener su autogobierno.

La conducción electrónica como asunto político puede considerarse desde diversas perspectivas. Propondría aproximarnos desde la ecología política. Durante los últimos diez años la ecología ha adquirido un nuevo significado. Es aún el nombre de una rama de la biología profesional, pero ese término sirve cada vez más para designar a un público general amplio y políticamente organizado que analiza e influye sobre las decisiones técnicas. Los nuevos dispositivos de gestión electrónica implican un cambio técnico del entorno humano que para ser benigno debe mantenerse bajo control político (uno que no sea sólo de los expertos).

Distingamos al medio ambiente como bien común del medio ambiente como riqueza. De nuestra habilidad para hacer esta particular distinción depende no sólo la

construcción de una teoría ecológica sensata, sino una efectiva jurisprudencia ecológica.

Debemos distinguir entre los bienes comunales en los que se enmarcan las actividades para la subsistencia de la gente, y las riquezas de la tierra (los recursos naturales) que sirven para la producción económica de aquellos bienes de consumo sobre los que se asienta la vida actual.

Si fuera poeta, discípulo del gran Basho, quizá podría hacer esta distinción en 17 sílabas de manera hermosa e incisiva para que llegara al corazón y fuera inolvidable.

Por desgracia, no soy poeta. Debo expresarme en inglés, un lenguaje que en los pasados cien años ha perdido la habilidad para hacer tal distinción.

Commons es una palabra del inglés antiguo. Según mis amigos japoneses, está bastante próxima al significado que *iriai* tiene aún en japonés. *Commons*, al igual que *iriai*, es un término que en la época preindustrial se usaba para designar ciertos aspectos

del entorno. La gente llamaba comunales a aquellas partes del entorno para las cuales el derecho consuetudinario exigía modos específicos de respeto comunitario. Eran comunales aquellas partes del entorno que quedaban más allá de los propios umbrales y fuera de sus posesiones, por las cuales —sin embargo— se tenían derechos de uso reconocidos, no para producir bienes de consumo sino para contribuir al aprovisionamiento de las familias. La ley consuetudinaria que humanizaba el entorno al establecer los bienes comunales era, por lo general, no-escrita. No sólo porque la gente no se preocupó en escribirla, sino porque lo que protegía era una realidad demasiado compleja como para determinarla en párrafos. La ley de bienes comunales regulaba el derecho de paso, de pesca, de caza, de pastoreo y de recolección de leña o plantas medicinales en los bosques.

Un roble podía ser parte de los bienes comunales. Su sombra, en verano, estaba reservada al pastor y su rebaño; sus bellotas se reservaban para los cerdos de los campesinos próximos; sus ramas secas servían de combustible para las viudas de la comunidad; en primavera, algunas de sus ramas jóvenes se usaban para ornar la iglesia y al atardecer podía ser el sitio de la reunión de los habitantes. Cuando la gente hablaba de bienes comunales, *iriai* designaba un aspecto del entorno limitado, necesario para la supervivencia de la comunidad, necesario para diversos grupos de maneras diferentes, pero que —en un sentido económico estricto— no era entendido como escaso.

Cuando hoy, en Europa, utilizo ante estudiantes universitarios el término *commons* (en alemán *Almende* o *Gemeinheit*, en italiano *gli usi civici*) mis oyentes piensan de inmediato en el siglo XVIII. Piensan en aquellas praderas de Inglaterra donde los habitantes tenían unas cuantas ovejas cada uno, y piensan también en el “confinamiento de los campos de pastoreo” que transformó las praderas comunales en recursos donde criar grandes rebaños con fines comerciales. En primera instancia, no obstante, los estudiantes piensan en la nueva pobreza que ese confinamiento trajo aparejada: el empobrecimiento absoluto de los campesinos que fueron forzados a abandonar las tierras en pos de un trabajo asalaria-

do; piensan, por último, en el enriquecimiento comercial de los señores, los lores.

En su inmediata reacción, los estudiantes piensan en el surgimiento de un nuevo orden capitalista. Al confrontarse con esa dolorosa novedad, olvidan que ese confinamiento trajo implícito algo más básico aún. Las vallas que cercaron los bienes comunales inauguraron un nuevo orden ecológico. El cercamiento no sólo transfirió el control de los campos de pastoreo de los campesinos al señor; también marcó un cambio radical en las actitudes de la sociedad frente al entorno natural. Antes, en cualquier sistema jurídico, la mayor parte del entorno se consideraba un ámbito comunal, del cual la mayoría de la

El confinamiento de los ámbitos comunales no sólo los roba al privatizarlos, hace que la gente los perciba como riqueza y como mercancía y acepte que otros decidan su destino —su utilización, su explotación, su intercambio, su monetarización, su devastación.

gente podía abastecer sus necesidades básicas sin tener que recurrir al mercado. Después del cercamiento, el entorno natural se volvió principalmente una riqueza al servicio de “empresas” que, al organizar el trabajo asalariado, transformaron la naturaleza en bienes y servicios de los que depende la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Esta transformación está en el punto ciego de la economía política.

Este cambio de actitudes puede ilustrarse mejor si pensamos en las calles en vez de considerar las áreas de pastoreo. Qué enorme diferencia vemos en los barrios de la ciudad de México durante los últimos veinte años. Entonces las calles de los barrios eran realmente ámbitos comunales. Alguna gente las utilizaba para vender hortalizas y carbón de leña. Otros colocaban sus sillas en las aceras para beber café o tequila. Otros se reunían en la calle para decidir quién sería el nuevo representante del vecindario, o para determinar el precio de un asno. Otros conducían sus asnos por entre la multitud, caminando próximos a sus bestias de carga; otros montaban en sus sillas. Los niños jugaban en las zanjas y, aún así, los caminantes podían usar la calle para ir de un sitio a otro.

Las calles no fueron construidas por la gente. Como cualquier otro ámbito común, la calle misma era el resultado de la gente que allí vivía y tornaba



habitable ese espacio. Las viviendas que franqueaban las calles no eran hogares privados en el sentido moderno: garajes para el depósito nocturno de los trabajadores. El umbral separaba aún dos espacios vivos, uno íntimo y otro común. Pero ni los hogares en su sentido íntimo ni las calles como ámbitos comunales sobrevivieron al crecimiento económico.

En los nuevos barrios de la ciudad de México las calles no son ya para la gente. Son ahora carreteras para coches, para autobuses, taxis y camiones. La gente es difícilmente tolerada en las calles a menos que se dirija hacia la parada del autobús. Si ahora la gente se sentara o detuviera en las calles sería un obstáculo para el tránsito, y el tránsito sería peligroso para quien así lo hiciera. La calle fue degradada, de bien comunitario a un simple recurso para la circulación de vehículos. La gente ya no puede circular por sus espacios, el tránsito desplaza su movilidad. Sólo puede circular cuando se le acota y se le traslada.

La apropiación de los campos de pastoreo por parte de los señores fue desafiada, pero la más fundamental transformación de esas áreas (y de las calles) de bienes comunales a recursos, aconteció —hasta hace muy poco— sin ser objeto de crítica. La apro-

La apropiación del entorno por la minoría fue claramente reconocida como un abuso intolerable, pero la aún más degradante transformación de las personas en miembros de una fuerza de trabajo industrial y consumidores fue tomada —hasta hace poco— como algo natural.

piación del entorno por la minoría fue claramente reconocida como un abuso intolerable, pero la aún más degradante transformación de las personas en miembros de una fuerza de trabajo industrial y consumidores fue tomada —hasta hace poco— como algo natural. Durante casi cien años la mayoría de los partidos políticos se negó a admitir la acumulación de los recursos naturales en manos privadas. Sin embargo, este cuestionamiento se concentró en la utilización privada de esas riquezas, sin distinguir lo que sucedía con

los ámbitos y bienes comunales. De tal modo ha sido así que aun mucho de la política anticapitalista refuerza la legitimidad de esta transformación de los bienes comunes en recursos.

Sólo muy recientemente, en la base de la sociedad, un nuevo tipo de “intelecto popular” comienza a reconocer lo que ha estado aconteciendo. El confinamiento le niega a la gente el derecho a esa clase de entorno en el cual —a lo largo de la historia— se había fundamentado la economía moral de la subsistencia. El confinamiento, una vez aceptado, redefine la comunidad: socava la autonomía local de la comunidad. El confinamiento de los bienes comunales favorece los intereses de los profesionales y burócratas estatales, y los de los capitalistas. Este confinamiento permite al burócrata definir la comunidad local como un ente incapaz de proveerse de lo necesario para su propia subsistencia. Las personas se tornan individuos económicos que dependen para su supervivencia de las comodidades producidas para ellos. Fundamentalmente, gran parte de los movimientos ciudadanos representan una rebelión contra esta inducida redefinición de la gente como consumidores.

La idea era hablar de electrónica, no sobre campos de pastoreo y calles. Pero soy historiador; quise hablar primero de los ámbitos y bienes comunales del pasado, según los conocía, para luego decir algo sobre la presente y mucho mayor amenaza contra los ámbitos comunales por parte de la electrónica.

Soy un hombre que nació hace 55 años en Viena. Un mes después de mi nacimiento fui subido a un tren y luego a un barco que me llevó a la isla de Brac. Allí, en una aldea de la Costa Dálmeta, mi abuelo deseaba bendecirme. Mi abuelo habitaba la casa donde su familia vivía desde la época en que los

Foto: Jesús Quintanar



Muromachi gobernaban desde Kyoto. Muchos habían sido los gobernantes de la Costa Dálmata: el dux de Venecia, los sultanes de Estambul, los corsarios de Almissa, los emperadores de Austria y los reyes de Yugoslavia. Pero todos estos cambios en los uniformes y el lenguaje de los gobernantes, poco alteraron la vida cotidiana en los 500 años anteriores. Las mismas vigas de olivo soportaban aún el techo de la casa de mi abuelo. El agua se recogía en las mismas losas de piedra sobre el techo. El vino era prensado en las mismas cubas, el pescado cogido desde el mismo tipo de embarcaciones y el aceite provenía de los árboles plantados cuando nació la ciudad llamada Edo, hoy Tokyo.

Mi abuelo recibía las noticias dos veces al mes. Cuando yo nací, para la gente que vivía alejada de las rutas principales, la historia aún fluía lenta, imperceptiblemente. Gran parte del entorno era aún un bien común. La gente vivía en las casas que ella misma había construido; se desplazaba por caminos que eran apisonados por el paso de sus propios animales: era autónoma en la obtención y el aprovechamiento de las aguas; dependía tan sólo de su voz cuando deseaba hablar alto. Todo cambió con mi llegada a Brac.

En el mismo barco en el que yo llegué en 1926, arribaba el primer altavoz a la isla. Muy poca gente allí había oído hablar de tal cosa antes. Hasta aquel día, hombres y mujeres hablaban con voces más o menos igualmente potentes. Todo eso cambiaría. El acceso al micrófono determinaría qué voces se amplificarían. El silencio dejó de ser un bien común; se tornó un recurso por el que habrían de competir los altavoces. El lenguaje en sí pasó de ser un bien común local a un recurso nacional para la comunicación.

Así como el confinamiento de los ámbitos comunales por parte de los señores incrementó la produc-

tividad nacional negándole al campesino que criase unas cuantas ovejas, así la usurpación provocada por los altavoces destruye ese silencio que durante toda la historia le otorgara a cada hombre y mujer su propia voz. Al menos que tengamos acceso a un altavoz, estamos silenciados.

Espero que el paralelismo sea visible ahora. Así como los ámbitos y bienes comunales de espacio son vulnerables y pueden ser destruidos por la motorización del tránsito, así los ámbitos comunales de expresión son vulnerables y pueden ser fácilmente destruidos por la usurpación que de ellos ejercen los modernos medios de comunicación.

II

Cómo entonces oponerse a la usurpación —impulsada por los nuevos artificios y sistemas electrónicos— de aquellos ámbitos comunales más sutiles y más íntimos a nuestro ser que los campos de pastoreo y las calles. Bienes comunales que por lo menos son tan valiosos como el silencio. El silencio, según las tradiciones occidental y oriental, es necesario para que surja la persona. Nos lo arrebatan las máquinas que nos imitan. Fácilmente podemos hacernos cada vez más dependientes de las máquinas para hablar y pensar, del mismo modo que ya somos dependientes de las máquinas para trasladarnos.

Semejante transformación del entorno, de bien común a recursos productivos, constituye la forma básica de la degradación ambiental. Esta degradación tiene una larga historia, que coincide con la historia del capitalismo pero que de ningún modo puede reducirse a ella. Por desgracia, la importancia de esta transformación ha sido ignorada o minimizada por la ecología política hasta el día de hoy. Es necesario que se le reconozca si pretendemos organizar movimientos para la defensa de lo que aún

queda de los bienes comunales. Esta defensa constituye la tarea pública crucial para la acción política actual. Tal tarea debe emprenderse con urgencia, puesto que los bienes comunales pueden existir sin policía, pero los recursos naturales no. Así como sucede con el tránsito, las computadoras requieren policías, en cada vez más cantidad y de formas cada vez más sutiles.

Por definición, las riquezas requieren de la policía para su defensa. Una vez defendidas, su recuperación como bienes comunales se torna más y más difícil. Ésta es una razón especial para tal urgencia. ❧

Foto: Jesús Quintanar



A quién beneficia el negocio de los biocombustibles

Elizabeth Bravo V.

I 2

En el mundo hay unos 800 millones de automóviles que consumen más del 50 por ciento de la energía producida en el mundo, lo que hace del automóvil individual el primer causante del efecto invernadero. A pesar de que existe un consenso de que el cambio climático es una realidad, no hay intenciones serias de cambiar el estilo de vida que lo causa. En lugar de ello se buscan soluciones tecnológicas que permitan mantener las ganancias de las empresas que se benefician de este modelo.

En este contexto, en los últimos años se ha empezado a promocionar los biocombustibles como una alternativa al calentamiento global.

Los países europeos, en su afán por cumplir con sus obligaciones dentro del Protocolo de Kyoto, están empeñados en cambiar sus sistemas energéticos basados en combustibles fósiles por biocombustibles, pero su producción no les da abasto. Aunque Estados Unidos tiene suficientes tierras agrícolas, el consumo de energía es tan alto que también va a depender de las importaciones para cubrir su demanda.

¿De dónde van a venir estos biocombustibles? De regiones como América Latina, Asia y África. En todos esos países, se van a utilizar tierras con vocación agrícola o ecosistemas naturales para la producción de cultivos dedicados a la producción de combustibles, acentuando los problemas generados en todo el mundo por los monocultivos de soya, palma aceitera y caña. Y los problemas ecológicos

y sociales de fondo quedarán sin resolver.

La ministra brasileña Dilma Rousseff dijo que los biocombustibles expresan “un casamiento entre los agronegocios y la industria del petróleo”. En este matrimonio habría que incluir a la industria biotecnológica.

Tal vez el ejemplo más paradigmático sea la nueva asociación creada por la petrolera BP y la biotecnológica DuPont. Juntas van a desarrollar, producir y comercializar una nueva generación de biocombustibles para abastecer la demanda global de combustibles renovables para transporte. Las dos empresas han estado trabajando desde 2003 y van a introducir al mercado británico un nuevo producto: el biobutanol como componente de la gasolina.

La industria biotecnológica, las grandes agroempresas, las compañías petroleras, las industrias de agroquímicos y semillas, la industria automovilística y las empresas de relaciones públicas y manejo de imagen son las grandes beneficiarias de la nueva ola a favor de los biocombustibles

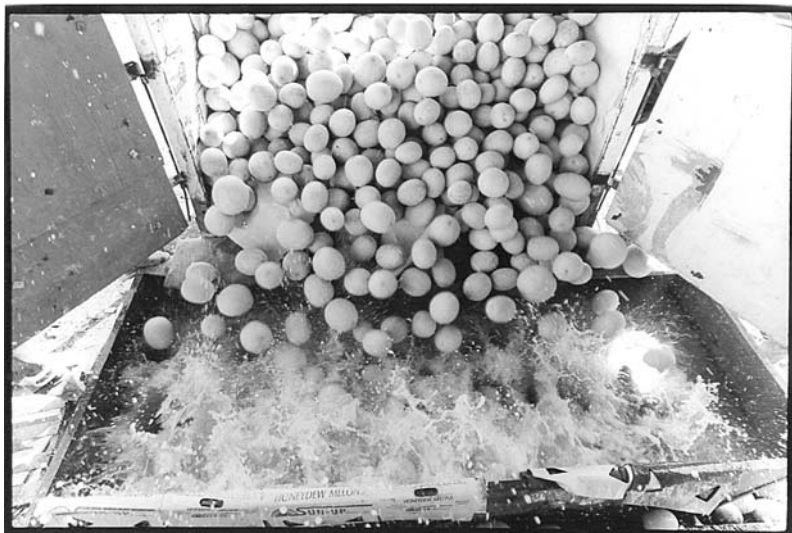
Las empresas están aprovechando la capacidad biotecnológica de DuPont y la experiencia y *know-how* de BP en la elaboración de combustibles. Esperan convertirse en los líderes mundiales del desarrollo de biocombustibles avanzados, que de acuerdo con sus proyecciones podría llegar al 20 por ciento, como mezclas con nafta para el sector transporte de algunos mercados claves.

La industria biotecnológica ha visto en los biocombustibles una oportunidad para ampliar sus negocios, principalmente porque le permitirán permanecer por largo tiempo en el mercado, a pesar de la oposición de los consumidores en todo el mundo que han rechazado los transgénicos como alimento.

La incorporación de cultivos transgénicos en la elaboración de biocombustibles ayudará a la industria biotecnológica a mejorar su imagen, que se va deteriorando estrepitosamente en los últimos años. Después de muchas promesas hechas por esta industria, que nunca hubiera podido cumplir, hoy ofrece desarrollar nuevas variedades transgénicas con mejores condiciones para la producción de energía.

La soya RR será la principal materia prima para la producción de biodiesel en el Cono Sur, y posiblemente en otros países de la región. La soya RR cubre ya extensas áreas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

El uso de la soya transgénica para la producción de biodiesel fue presentada por el presidente Lula



La producción de melón en el Istmo oaxaqueño

Serie: Jorge Acevedo

como salida a la polémica sobre el uso de la soya transgénica en el Brasil. Dijo que en lugar de utilizarla como alimento servirá para hacer biodiesel, porque el automóvil no la va a rechazar.

De este negocio se va a beneficiar sobre todo la empresa Monsanto, quien cobrará regalías por la venta de sus semillas transgénicas patentadas y por el producto de la cosecha (en este caso, el biodiesel), como lo hace ya en el caso del aceite de soya hecho a partir de soya RR, y empresas como Cargill, Bunge, ADM, que se van a encargar de su comercialización.

13

Gran parte del maíz utilizado en la destilación de etanol en Estados Unidos es sin duda de origen transgénico. Cada litro de etanol vendido aumentará los ingresos de las empresas biotecnológicas portadoras de las patentes de las semillas de maíz transgénico. Entre estas empresas se incluye Monsanto, Syngenta, Bayer y Dupont.

Otra oleaginosa utilizada en la fabricación de biocombustibles es la colza. La Confederación de Industriales de Alimentos y Bebidas de la Unión Europea (CIAA) ha pedido a la Comisión Europea que autorice la importación de nuevas variedades de colza genéticamente modificada para la industria de biodiesel.

Adicionalmente, se está empezando a probar nuevas variedades transgénicas específicamente diseñadas para la producción de biocombustibles. Así, la empresa Syngenta ha desarrollado el maíz transgénico 3272 que expresa la enzima alfa amilasa, mezclado con maíz convencional en el proceso de elaboración de etanol a partir de maíz. Las empresas alimenticias estadounidenses se han opuesto a la introducción en el ambiente de cultivos transgénicos que no estén destinados para la alimentación porque temen una eventual con-

taminación genética de sus productos. La enzima alfa amilasa ha sido identificada como un importante alergénico de alimentos, así que si los genes que la sintetizan llegan a infiltrarse en la cadena alimenticia nos enfrentaríamos a una proteína cuyos efectos en la fisiología humana podrían ser inesperados.

Otro sector que se beneficiará de los biocombustibles es la industria petrolera. Las empresas petroleras, sobre todo europeas, han decidido entrar en el negocio de los productos “ambientalmente amigables”, para satisfacer las

los biocombustibles, pero tienen estaciones de servicios en países donde los consumidores sí los demandan. Por ejemplo, BP tiene 2 700 estaciones de servicio en Alemania (la primera productora de biodiesel en Europa), y Shell 2 200 en Alemania y mil en Francia.

Royal Dutch Shell apunta a desarrollar una segunda generación de biocombustibles, y ha estado experimentando en la refinación de bioetanol a partir de lignina y celulosa en cooperación con la empresa canadiense Longen. Otro socio estratégico de Shell es la ale-

integrarse con Brasil y Argentina en el desarrollo de combustibles de origen vegetal como alternativa energética. La búsqueda de tecnologías para producir combustibles alternativos, entre ellos el biodiesel, se incluye también en un acuerdo recientemente firmado por Venezuela y otros 13 países caribeños para la creación de Petrocaribe. En Brasil la mayor parte de los combustibles que poseen alcohol en estado puro o en mezclas son producidos por refinerías de Petrobrás, la empresa estatal.

La empresa española Repsol, que ya produce biodiesel en España, invertirá 30 millones de dólares en una primera planta de biodiesel en Argentina, que comenzará a construir en el 2007. La capacidad instalada será de 120 mil metros cúbicos por año, en una primera etapa, que serán integrados dentro del gasoil, en una proporción de 5 por ciento.

Finalmente está la industria automovilística. Esta industria es la responsable del mayor consumo de combustibles fósiles y del efecto invernadero a nivel mundial, pero también se está adaptando a la nueva ola de los biocombustibles.

Ya en Brasil, todas las grandes empresas internacionales de automóviles se han adaptado a la producción de vehículos que utilizan alcohol. La mitad de los vehículos vendidos en Brasil en el 2004 están diseñados para utilizar alcohol puro o en mezclas.

En otras partes del mundo, estas empresas han entrado en asociaciones y proyectos conjuntos con diversas empresas para mejorar su imagen, transformarse tecnológicamente y seguir en el negocio por mucho tiempo más. Tenemos por ejemplo el anuncio hecho por la empresa alemana Volkswagen AG de extender la garantía a los automóviles que utilicen biodiesel (B5) añadido al combustible. Este anuncio es parte de una

Los consumidores quieren seguir manteniendo su estándar de vida en el derroche, pero quieren tranquilizar su conciencia poniendo en el tanque de su vehículo un 5.75% de biocombustible. Lo paradójico es que éste procede de enclaves donde los campesinos son desplazados violentamente de sus propias tierras agrícolas.

necesidades de sus consumidores y para adaptarse a las nuevas metas de la Comisión Europea en materia de energías renovables. Algunas de las empresas que han sabido diversificar más su negocio son Total, BP y Shell.

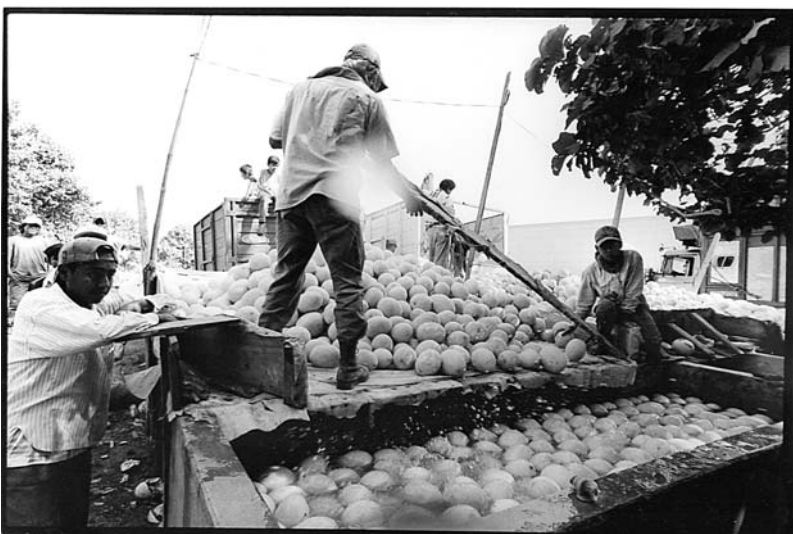
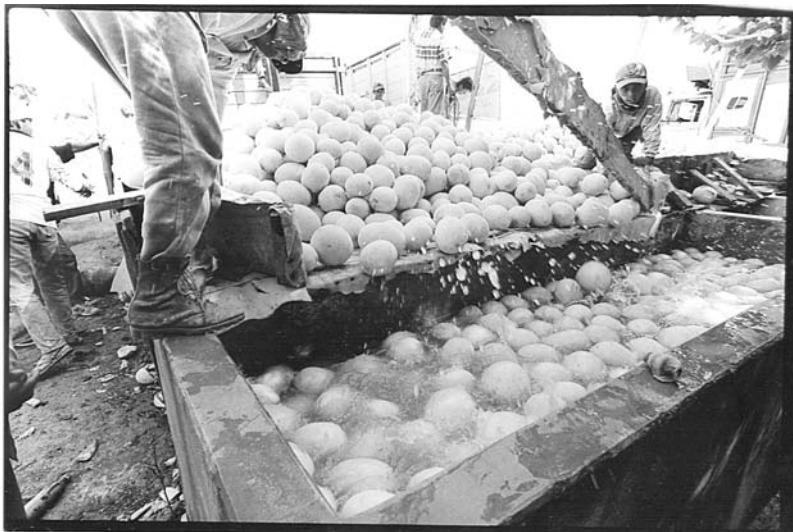
La francesa Total obedece a las políticas de su país, que está promocionando con mucha fuerza las energías renovables. Francia es el segundo productor de biodiesel y etanol en Europa (en ese país tiene 4 500 estaciones de servicios), y tiene un importante mercado en España e Italia, donde posee 1 740 y 1 400 estaciones de servicios respectivamente. Hoy planea abrir nuevas plantas en África y América del Sur.

El caso de BP y Shell es diferente, pues ni Holanda ni Inglaterra están empeñados en promover

mana Choren Industries con quien está trabajando en la producción de diesel a partir de biomasa forestal.

Entre las empresas estadounidenses, Chevron ha formado una unidad de negocios en tecnologías avanzadas para aprovechar las oportunidades de producción y distribución de etanol y biodiesel en Estados Unidos. Esta unidad estará ubicada en Galveston, Texas con una capacidad de producción de 100 millones de galones/año de biodiesel (378.5 millones de litros/año). Chevron procesa 300 millones de galones/año (1 135.62 millones de litros/año) de etanol en Estados Unidos.

En América Latina, Venezuela, pese a poseer importantes reservas de petróleo, se dispone a



iniciativa conjunta por dos años con la transnacional alimenticia Archer Daniels Midland Company (ADM), luego de que las dos empresas evaluaron durante un año este biocombustible.

Por su parte, la empresa japonesa Toyota anunció una cooperación estratégica con BP para la producción de etanol a partir de celulosa procedente de desechos en Canadá.

Éste es el camino que han seguido también otras empresas. Y no es que ellas estén preocupadas por el futuro del planeta, sino que tienen que adaptarse a las nuevas necesidades de sus consumidores

y a las obligaciones internacionales que algunos países han adquirido en el Protocolo de Kyoto.

Hoy día en todo el mundo se está promoviendo el uso de biocombustibles y varios países han iniciado programas nacionales, han expedido leyes favoreciendo a este sector, se han creado consejos consultivos sobre el tema, etcétera.

Las justificaciones que se dan, entre otras, son que la proliferación de cultivos energéticos como la caña, la palma aceitera, la soya y otros nuevos cultivos, puede constituir un factor importante para el desarrollo rural, y

que la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles va a contribuir a disminuir el calentamiento global.

El negocio de biocombustibles únicamente ayudará a posicionar a la industria biotecnológica, al reciclamiento de las industrias petrolera y automovilística, y a expandir las ganancias de las industrias que comercializan biocombustibles.

Esto no significa que todo lo dicho se aplique al uso de aceites vegetales, bagazo de caña u otros residuos agrícolas o forestales, para abastecer las necesidades energéticas de pequeñas comunidades locales.

El problema que estamos enfrentando ahora es de escala. Nos referimos a los problemas que surgen cuando tenemos que satisfacer la demanda de los consumidores que quieren seguir manteniendo su estándar de vida basado en el derroche, pero que quieren tranquilizar su conciencia al poner en el tanque de su vehículo un 5.75 por ciento de biocombustible, que puede proceder de las selvas amazónicas del Brasil, o de tierras paraguayas, donde los campesinos son desplazados violentamente de sus propias tierras agrícolas.

A menos que cambiemos el modelo de desarrollo y que iniciemos una transición hacia una sociedad postpetrolera, donde se cambien los patrones de consumo de energía, los biocombustibles no serán una solución para frenar el cambio climático.

Ante esto, debemos seguir trabajando por una sociedad que promueva y respete la soberanía alimentaria y energética de todos los pueblos.

Elizabeth Bravo,
Acción Ecológica:
ebravo@rallt.org,
<http://www.accionecologica.org/webae/index.php>

La fiebre por biocombustibles y sus impactos negativos

16 *Los siguientes fragmentos de la discusión en torno a los biocombustibles no agotan los argumentos, pero apuntan a cuestionar la lógica viciada de sustituir con biocombustibles una energía fósil necesaria para producirlos, más los impactos negativos que ya se avizoran, sobre todo en el Sur global.*

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, señaló en un congreso mundial sobre biocombustibles que “tienen un fantástico potencial para hacer frente a los retos de la crisis del cambio climático” e instó a la industria automotriz a “adaptar sus productos a la nueva generación de biocombustibles”. Al día siguiente, la cumbre de presidentes de la Unión Europea acordó un plan de acción en materia energética cuyo objetivo para 2020 es que una quinta parte del consumo total de energía sea renovable, y que mínimo un 10% sean biocombustibles. Todo coronó cuando los dos principales productores mundiales de etanol, Brasil (con la caña de azúcar como insumo) y Estados Unidos (usando maíz), sellaron una alianza para promover un mercado mundial que facilite el uso de biocombustibles, extender la plantación de los insumos agrícolas necesarios en América Central, y agilizar inversiones en destilerías por miles de millones de dólares. (*Marcelo Zlotogwiazda, Página doce, 11 de marzo.*)

Con gran alarde, la British Petroleum (BP) acaba de donar 500 millones de dólares para fondos de investigación de la Universidad de California en Berkeley, los Laboratorios Lawrence Livermore y la Universidad de Illinois, a fin de desarrollar nuevas fuentes de energía: básicamente biotecnología para plantaciones que generen biocombustible.

[...] Esta asociación refleja un alineamiento global corporativo rápido, sin fiscalización, y sin precedentes de las más grandes empresas del mundo en el agro-negocio (ADM, Cargill y Bunge), la biotecnología (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont), el petróleo (BP, TOTAL, Shell) y las industrias automotrices (Volkswagen, Peugeot, Citroen, Renault, Saab). Para estas empresas es una inversión relativamente pequeña, ya que se van a apropiar de la pericia académica construida por décadas de apoyo gubernamental, lo que se traduce en billones de ganancias para esos socios globales.

[...] Destinar toda la producción actual de maíz y soja de Estados Unidos a la producción de biocombustibles sólo satisfaría el 12% de nuestra demanda de gasolina y el 6% de diesel. El total del área estadounidense para plantaciones alcanza 1 618 742 kilómetros cuadrados. Para sustituir el consumo de petróleo de EUA por biocombustible serían necesarios 3.62 millones de kilómetros cuadrados para etanol de maíz y 22.79 millones de kilómetros cuadrados de soja para biodiesel. Los biocombustibles van a transformar Iowa y Dakota del Sur en importadores de maíz hacia el 2008. (*Miguel Altieri y Eric Holt-Gimenez, Alai-amlatina.*)

Brasil es capaz de suministrar en veinte años una cantidad de bioetanol suficiente para reemplazar un 10% de la gasolina utilizada en todo el mundo, afirma un estudio de la Universidad del Estado de Campinas (Unicamp).

Para ello haría falta invertir 7 300 millones de euros, de los cuales un 20% debería ser en infraestructura de transporte y distribución. Se dedicaría a la caña 30 millones hectáreas, un 10% de la superficie agrícola de Brasil. Actualmente se cultivan sólo 5.6 millones de hectáreas de caña. (<http://www.busrep.co.za/index.php?fSectionId=6&fArticleId=3679716>)

Aunque la cantidad de biodiesel o etanol que se puede obtener, varía con el tipo de cultivo, se necesitan enormes extensiones de tierra cultivable para producirlos. Con la cantidad de cereales necesarios para llenar el tanque de una camioneta se puede alimentar una persona un año entero. La mayor parte de la energía producida se consume en el cultivo y el procesado —petróleo, agrotóxicos, riego, maquinaria, transporte, refinamiento.

Según las condiciones y el cultivo, el saldo puede incluso ser negativo. Si en la ecuación se incluye la destrucción de ecosistemas como bosques y sabanas, o que las refinerías de etanol y las plantas de

procesamiento de celulosa son fuente de contaminación del ambiente y la salud de los habitantes cercanos, el saldo definitivamente es negativo. (*Silvia Ribeiro, "Agrocombustibles vs soberanía alimentaria", La Jornada, 19 de marzo.*)

Quienes promueven estos combustibles se equivocan, porque el mundo es finito. Si los biocombustibles llegan a despegar, causarán un desastre humanitario mundial.

Tal como se utilizan hoy, a pequeña escala, no son dañinos. Unos cuantos millares de verdes en el Reino Unido ya mueven sus vehículos con aceite de freír patatas.

Pero el aceite para cocinar usado apenas podría suministrar 100 mil toneladas de diesel anuales en este país, equivalentes a 1/380 del combustible utilizado para el transporte por carretera.

Es posible convertir en alcohol los desechos de cultivos —tal como el rastrojo del trigo—, para su uso en automóviles, pero es difícil que podamos extraer más energía de la que necesitamos para transportar y procesar la paja.

No obstante, los planes de la Unión Europea, como los de todos los entusiastas de la biolocomoción, dependen de cosechas específicas para combustibles. En cuanto se examinan las implicaciones, se ve que el remedio es peor que la enfermedad.

El transporte por carretera en el Reino Unido consume 37.6 millones de toneladas de productos derivados del petróleo cada año. La cosecha más productiva en este país es la colza. El rendimiento promedio es de 3 a 3.5 toneladas por hectárea. Una tonelada de semilla produce 415 kilos de diesel. Así que cada hectárea de tierra arable podría proporcionar 1.45 toneladas de combustible para el transporte.

Mover nuestros coches y autobuses con biodiesel requeriría, en otras palabras, 25.9 millones de hectáreas. Existen en el Reino Unido 5.7 millones de hectáreas. Incluso el objetivo más modesto del 20% propuesto por la Unión Europea para el 2020 se llevaría casi todas las tierras de cultivo.

Si esto sucede en toda Europa, las consecuencias sobre el suministro global de alimentos serán catastróficas: lo suficiente para inclinar la balanza de ser excedentarios a ser deficitarios netos. Si, como algunos ecologistas demandan, esto se tuviese que hacer a escala mundial, entonces la ma-

yor parte de la superficie arable del planeta se dedicaría a producir alimentos para coches, no para personas.

Estas perspectivas, parecen, a primera vista, ridículas. Si no se pudiese cubrir la demanda de alimentos, ¿no se asegurará el mercado de que las cosechas se utilicen para alimentar personas, y no vehículos? No existen seguridades al respecto. El mercado responde al dinero, no a las necesidades. La gente que posee coches tiene más dinero que la gente que se está muriendo de hambre.

[...] Resulta chocante ver lo estrecha que puede ser la visión de algunos ecologistas. En una reunión en París sobre el cambio climático abrupto, un grupo de científicos y verdes decidió que las dos grandes ideas de Tony Blair —hacer frente al calentamiento global y ayudar a África—, sólo podrían llevarse a cabo convirtiendo a África en una zona de producción de biocombustibles. Esta estrategia, según sus promotores, "proporciona una vía de desarrollo sustentable para muchos países africanos que pueden producir biocombustibles baratos". Sé que la definición de desarrollo sustentable ha ido cambiando, pero no era consciente de que conllevaba ahora la hambruna masiva y la destrucción de las selvas tropicales. El año pasado el comité parlamentario británico sobre ambiente, alimentos y asuntos rurales, que supuestamente debería estar especializado en aunar sus ideas, examinó todas las posibles consecuencias de la producción de biocombustibles —desde los ingresos rurales al número de golondrinas— excepto la repercusión sobre la producción de alimentos.

Necesitamos una solución al calentamiento global causado por los coches, pero no es ésta. Si la producción de biocombustibles es lo suficientemente grande como para afectar al cambio climático, será

Foto: Jorge Acevedo



lo suficientemente grande como para afectar el hambre mundial. (*George Monbiot, País Internacional, 29 de agosto de 2006.*)

El creciente entusiasmo por los biocombustibles en Estados Unidos surge en parte de reconocer tardíamente que las existencias de petróleo en lugares “volátiles” del mundo no podrán ser adquiridas, tan fácilmente como se pensaba, mediante acuerdos comerciales o guerras. También desvía la atención de tareas tan espinosas como cortar los consumos de energía y promover la conservación. La frase común en estos días cuando se habla de etanol es “tener independencia energética”. [...] Grupos ambientalistas como Natural Resources Defense Council (NRDC) se vuelven paladines del desarrollo de ciertos tipos de etanol anunciándolos como combustibles amigables con el ambiente que pueden reducir las emisiones globales de bióxido de carbono (CO₂).

[...] El entusiasmo está por convertirse en un verdadero estallido pues el gobierno de Estados Unidos ordena que por lo menos 30% del combustible utilizado en el transporte se derive de biocombustibles (sobre todo etanol) hacia 2030 —un objetivo que requerirá que se produzcan unos 227 mil millones de litros de etanol anuales. Ford, Daimler-Chrysler y General Motors juntos esperan vender más de 2 millones de automóviles a base de etanol en los próximos diez años, y Wal-Mart, el mayor gigante del menudeo en el mundo, tiene planes para vender combustible de etanol en sus 380 súper tiendas estadounidenses. El *boom* del etanol es una noticia especialmente buena para las agroindustrias como Archer Daniels Midland (ADM), que controla cerca de 30% del mercado de etanol en Estados Unidos.

[...] En un estudio de 2005, David Pimentel de Cornell University y Tad Patzek de Berkeley examinan la energía producida por los biocombustibles en relación con la energía requerida para producir etanol. Hallaron que el *switchgrass* o *Panicum virgatum*, un pasto gramíneo [conocido también como mijo perenne] requiere 45% más energía fósil que el combustible producido, y que la biomasa de madera requiere 57% más energía fósil que el combustible producido. Según Pimentel, “no hay beneficio de energía en utilizar biomasa vegetal para producir combustible líquido. Estas estrategias no son sostenibles”. (*Ingeniería genética extrema, informe del Grupo ETC, marzo de 2007.*)

Varios movimientos sociales latinoamericanos reunidos en Brasil rechazaron la expansión de los cultivos de caña de azúcar utilizada en la fabricación de combustibles, y anunciaron acciones de protesta.

“Nuestro principal objetivo es garantizar la soberanía alimentaria”, declaró Vía Campesina, “pues la expansión de la producción de biocombustibles agrava la situación de hambre en el mundo. No podemos mantener los tanques llenos y las barrigas vacías”. (*ABN, Caracas, Venezuela, primero de marzo.*)

La producción de etanol en la región Orinoquia implicaría monocultivos, transgénicos y agroquímicos en la cuenca del río Orinoco. En América Latina existen, aproximadamente, 300 millones de necesitados. Las tierras deben emplearse para producir alimentos y no combustible. (*Presidente de Venezuela Hugo Chávez, 12 de marzo.*)

“La conversión de tierras utilizadas hasta ahora para producir forrajes o alimentos, y de ahora en más para complejos agroenergéticos, pondría poner en riesgo indudable el derecho soberano de nuestro pueblo a una alimentación saludable”, dicen Jorge Rulli y Stella Semino del Grupo de Reflexión Rural (GRR).

“La soja no es un mero cultivo, la soja es un sistema, la soja es el sistema general que condiciona cualquier política”, repiten los miembros del GRR. Y añaden: “Tanto la seguridad como la soberanía alimentaria de los pueblos desaparecen en los marcos de una realidad catastrófica y en medio de la insumo-dependencia, el desarraigo rural y el despoblamiento del campo, el hambre, la indigencia y los colapsos ambientales”.

“Este modelo no sólo es insostenible y amenaza gravemente los agrosistemas y la diversidad biológica, también expulsa población del campo a la ciudad, liquida las economías regionales y rechaza toda aplicación de las ciencias agronómicas en exclusivo beneficio del uso de agrotóxicos y biotecnologías”. (*Marcelo Lorenzo, El Día de Gualaguaychú, 9 de marzo.*)

En el Foro Mundial de Soberanía Alimentaria se profundizó el debate sobre la necesidad de que los movimientos sociales de todo el mundo prioricen la lucha en defensa de la producción de alimentos y la soberanía alimentaria de cada pueblo. Esa lucha implica también un combate amplio contra la ofensiva del capital internacional sobre el campo, principalmente en la cuestión del control de los agro-combustibles. Eso porque hay una alianza que unifica los intereses del capital internacional: las empresas petroleras, las corporaciones transnacionales que controlan el comercio agrícola y las semillas transgénicas, y las empresas automotrices. El único objetivo es mantener el actual patrón de consumo en el



dicial al ambiente y expulsa mano de obra del campo. El monocultivo afecta el calentamiento del planeta, pues destruye la biodiversidad e impide que el agua y la humedad de las lluvias se mantenga en equilibrio con la producción agrícola. Esto además del uso intensivo de agrotóxicos y máquinas. (*Secretaría Nacional del Movimiento de los Sin Tierra, MST, 6 de marzo.*)

Según Joao Pedro Stedile, hay que analizar la problemática de los nuevos combustibles; debe ser cuidadosamente analizada, y no puede ser vista al margen de un cambio en la matriz energética mundial. “El capital quiere sacar los alimentos de los pueblos para ponerlos en las burguesías del norte. Tenemos que luchar contra esto desde la raíz. El mundo tiene que cambiar su matriz energética de transporte. Debemos oponernos al transporte individual y luchar por el transporte colectivo”, indicó.

Su organización, los Sin Tierra, se opone a la siembra de grandes extensiones de monocultivos propios de las grandes plantaciones que abastecen las plantas que fabrican el biocombustible, pero están de acuerdo con producirlo en pequeñas explotaciones para abaratar el costo de los carburantes con los que funcionan los tractores y la maquinaria agrícola. (*Luis Hernández Navarro, La Jornada, 26 de febrero.*)

primer mundo y las altas tasas de lucro de las transnacionales.

[...] Concordamos en que el uso de agrocombustibles es más adecuado para el ambiente que el petróleo. Pero eso no afecta la esencia del problema de la humanidad, que es la actual matriz energética y de transporte, basada en el uso de vehículos individuales. Defendemos la sustitución radical de la actual forma consumista y contaminante de transporte individual por transporte colectivo, con trenes, metro, bicicletas, etcétera.

No aceptamos que en ese plan se utilicen productos agrícolas destinados actualmente a la alimentación humana como el mijo, la soya, el girasol, etcétera, para transformarlos en energía para los automóviles.

En el caso de una producción necesaria de agrocombustibles, debemos producirlos de modo sustentable. Es decir, combatimos el actual modelo neoliberal de producción en grandes haciendas y el monocultivo de esos productos. El monocultivo en gran escala es perju-

Mae-Wan-Ho, de la Universidad de Hong Kong, explica: “Los biocombustibles son considerados erróneamente como ‘neutros en carbono’. Se ignoran así los costos de las emisiones de CO₂ y de la energía de fertilizantes y pesticidas utilizados en las cosechas”.

Un estudio del Gabinete Belga de Asuntos Científicos muestra resultados semejantes. “El biodiesel provoca más problemas ambientales y de salud porque su contaminación es más pulverizada y libera



Foto: Agencia Cerigua

más contaminantes que provocan la destrucción de la capa de ozono”. (Edivan Pinto, Marluce Melo y Maria Luisa Mendonça, “El mito de los biocombustibles”, Alai, 13 de marzo de 2007.)

El estímulo a la producción de los biocombustibles significa más deforestación, más modelo agroexportador, más monocultivo, más agronegocios y más efecto invernadero. [...] ¿Se va avanzar sobre la superficie ya dedicada a la alimentación para producir biocombustibles? ¿O se va a producir sobre las selvas y demás reservas forestales? Países como Argentina, ¿van a acentuar la producción de soja? ¿Se va a desmalezar la Amazonía para producir caña de azúcar? Las selvas del sudeste de Asia y del Sur de África ¿van a dar paso a la palma productora de aceite? ¿Todo esto no va a generar más calentamiento global?

La producción agrícola depende de las variables climáticas. Una sequía no sólo puede hacer que el precio de alguna de estas materias primas se altere, sino que la ecuación varíe notablemente. El precio podría caer a valores donde no sería rentable producir, o por el contrario, podría ser tan alto que nadie quisiera producir para la alimentación.

Si los precios del maíz y de la soja suben más aún podrían desplazar cualquier otra producción destinada a la alimentación humana y aumentaría la dependencia de las compañías productoras de agroinsumos, las cuales obtienen muchos de sus productos a partir de la destilación del petróleo. Como se observa, no es una operación de suma o resta, sino una ecuación compleja. (Pablo Ramos, Prensa Mercosur, 28 de febrero.)

Los biocombustibles tienen su historia. Durante la crisis energética de 1973, Brasil reconvirtió parte de sus ingenios azucareros para producir etanol y se volvió en su primera potencia exportadora. Hoy Colombia quiere seguir su ejemplo y ser una potencia productora de bioetanol y biodiesel.

Estudiosos de este desarrollo agroindustrial han denunciado que estos cultivos se han utilizado para el lavado de dinero del narcotráfico y como mecanismo de los paramilitares para desplazar de mane-

ra forzada a la población, pues su propósito es apropiarse de importantes y ricas regiones. Su estrategia consiste en desplazar a la gente y una vez abandonadas las tierras, las ocupan las empresas palmicultoras. Jiguamiandó y Curvaradó, municipios del Pacífico, son ejemplos estruendosos: la empresa Urapalma ocupó de manera ilegal esos territorios afrocolombianos.

Estas comunidades del Chocó recibieron la titulación de sus tierras en noviembre de 2000, luego de años de reiteradas violaciones a sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y nueve años después de que la Constitución Nacional reconociera los derechos territoriales de comunidades negras e indígenas.

La titulación se recibió en momentos en que las comunidades estaban desplazadas. Al retornar, encontraron su territorio ocupado con cultivos de palma, y la desaparición de la casi totalidad de los poblados y caseríos tradicionales a causa de las siembras con palma de aceite. El abandono, la destrucción de sus viviendas, y la desaparición de los caminos (que impide la comunicación entre las comunidades) desarticuló el tejido social. Comenzó entonces un largo proceso jurídico y de denuncia de su parte para recuperar sus territorios, teñido de grandes irregularidades para favorecer a las empresas de la palma aceitera.

Algo similar sucede en la región de Tumaco (al sur de Colombia, en los límites con el vecino país del Ecuador). Las comunidades han vivido también el desplazamiento forzado y las amenazas, y es así que las empresas o el propio Estado proponen a los miembros de los consejos comunitarios convertirse en “empresarios del sector rural” como alternativa para permanecer en su territorio.

Dicho de otra manera, se los fuerza a involucrarse en las alianzas o cadenas productivas con empresarios de la palma. De esta manera, los territorios que antes eran selvas húmedas se han ido convirtiendo en monocultivos de palma, de modo que se despoja a las comunidades negras de su cultura y de su territorio y se destruyen regiones que son de las más diversas del planeta. (Tatiana Roa Avendaño, International Resource Center, 18 de enero de 2007.) ❖



Foto: Jesús Quintanar

El horror de contar con minerales

La “guerra civil” en la República Democrática del Congo (RDC) ha costado de 3.5 a 4.5 millones de muertos, en el lapso de diez años. Pese a la complejidad del conflicto, no es aventurado afirmar que Ruanda y Uganda, tras invadir el territorio congoleño, han estado lucrando (en contubernio con grandes empresas transnacionales) del saqueo de los minerales estratégicos que en la RDC son tan abundantes: diamantes, oro, cobalto, casiterita y coltán (columbita-tantalita de la que se extrae tantalio —un súper conductor de nueva generación que soporta altas temperaturas y se utiliza en fibra óptica, naves espaciales, microchips, computadoras portátiles, video juegos y en baterías para teléfonos móviles (de los cuales se vendieron mil millones de unidades en 2006 a nivel mundial). De la casiterita también se extrae tantalio, en mucho menor cantidad.

Según datos del Comité de Solidaridad con el África Negra-Madrid, en 2000 Ruanda ganó 40 millones de dólares en diamantes, 15 millones por oro y 191 millones por el coltán extraído de suelo congoleño. El mismo año, Uganda obtuvo 1.8 millones de dólares por diamantes, 105 por el oro y 6.2 millones por el coltán —cifras oficiales que no contabilizan el abrumador tráfico clandestino.

La RDC cuenta con el 80% de las reservas de coltán existentes, situadas sobre todo en los Kivus, provincias orientales, fronterizas con Ruanda y Uganda, en yacimientos de aluvión a cielo abierto donde trabajan muchos niños. Ruanda, sobre todo, tiende una red de ilegalidades, patrocina grupos armados y “movimientos de liberación” como la llamada Reagrupación Congoleña por la Democracia (RCD), aniquila a miles de personas y detenta el virtual monopolio de la extracción y el tráfico del coltán con su empresa: la Sociedad Minera Grands Lacs (Somigl), en realidad una alianza de Africom (belga), Promeco (ruandesa) y Cogecom (sudafricana). Como joya de la vileza de esta invasión expoliadora disfrazada, dicho monopolio entre-

ga a RCD y sus 40 mil efectivos militares, 10 dólares por kilo de coltán exportado. Su dirigente, Adolphe Onusumba, proclama orgulloso: “con la venta de diamantes ganábamos unos 200 mil dólares al mes. Con el coltán llegamos a ganar más de un millón de dólares al mes”.

El límite de la existencia es tan precario y la violencia y el horror son tan contundentes que en los años de la guerra el Consejo de Seguridad de la ONU ha designado varios Grupos de Expertos para documentar la situación y hacer recomendaciones.

No obstante, a fines de 2006 y pese a preocuparse por hallar “las medidas viables y eficaces que el Consejo de Seguridad podría imponer con el fin de impedir la explotación ilegal de recursos naturales para financiar grupos armados y milicias en la parte oriental de la RDC”, el Grupo de Expertos, tras consultar a sus “contrapartes”, no consideró aconsejable sancionar las importaciones de bienes específicos procedentes de territorio congoleño, temeroso de que las sanciones “favorecerían a quienes violan el embargo”, podrían desencadenar una nueva guerra civil o tener “repercusiones negativas en el “incipiente entorno inversionista del país” [sic].

Alejandro Teitelbaum (Argenpress, 29 de marzo de 2007) critica esta postura y argumenta con claridad que aunque el Grupo se preocupa por la explotación ilegal, sólo menciona a algunas empresas locales y “no se refiere para nada a las grandes mineras y a las industrias electrónicas transnacionales que son las promotoras directas o indirectas de la situación, y los destinatarios finales y principales beneficiarios de los minerales de la RDC al precio de una masacre generalizada que va para diez años”.

Si uno hurga un poco, los grandes consumidores de coltán son: Sony, Microsoft, Hewlett-Packard, IBM, Nokia, Intel, Lucent, Motorola, Ericsson, Siemens, Hitachi y Bayer, entre otros, y aunque la Simigl monopoliza el coltán, el negocio del oro, los diamantes, el cobre y el cobalto está en manos de mineras como AngloGold Ashanti

(sudafricana) y Metalor, sueca. Pero AngloGold está asociada con Anglo-American (Johannesburgo y Londres) y con Barrick Gold Corporation, con sede en Canadá. Anglo-American detenta el 45% de las acciones de De Beers, que tiene el cuasi monopolio internacional de la industria del diamante. Barrick Gold es socia de Adastra Mining que a su vez es miembro del Corporate Council on África (junto con Goodworks, Halliburton, Chevron-Texaco, Northrop Grumman, GE, Boeing, Raytheon y Bechtel).

No extraña entonces que el Grupo de Expertos refleje la opinión de las “contrapartes”. Mientras tanto, además de los efectos catastróficos de la violencia de la guerra, las principales víctimas son los mineros. En algunas regiones del Congo, son entre 30 mil y 200 mil “mineros artesanales” conocidos como “cavadores” —que ganan al día entre 4 o 5 dólares diarios de salario bruto— extraen el mineral a cuenta de “sub-tratantes” que lo distribuyen en la red de compradores y contrabandistas. Son las minas de diamantes las que mayor número de mineros tienen a su disposición: un millón que vive en condiciones tan infrahumanas que existe una guerra perpetua entre ellos, los servicios de seguridad de las empresas, y las bandas criminales. La cuota de muertos es incontable. Los mineros trabajan con pérdidas, por los dineros que tienen entregar como “propina” a los militares o los grupos armados irregulares que cuidan las minas. Desde la privatización de la minera estatal Gecamines, existe una multitud de concesiones donde laboran unos 150 mil “mineros artesanales”, en condiciones tan duras que a fines de 2006 murieron tres y quedaron heridos veinte cuando los mineros se opusieron a la sociedad minera Chemaf. En la región los mineros pueden ganar hasta 200 dólares brutos al mes, de los cuales, en promedio, se quedan cuando mucho con 15 dólares de nuevas deudas.

Ruanda y Uganda, en cambio, reciben ayuda de muchos países donantes para el desarrollo y parte de sus deudas externas fueron canceladas. ❖

Costa Rica vs. el TLC

Costa Rica es el único país potencialmente miembro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica (menos Panamá y Belice), República Dominicana y Estados Unidos que todavía no lo ha ratificado. Y la apuesta del movimiento popular y social es a seguir bloqueando la aprobación del tratado.

Un movimiento popular cuestiona la esencia misma



del modelo económico promovido desde el Norte y busca abrir puertas para un modelo de desarrollo más congruente con la historia costarricense. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde se aplicó el consenso de Washington desde hace años, en Costa Rica la inversión pública en servicios sociales y en sectores estratégicos de la economía ha sido un factor determinante para tener una calidad de vida relativamente mejor.

En los últimos 25 años y a pesar de sus efectos negativos para la mayoría de la población, el proyecto neoliberal ha ido ganando espacio con la implementación de un Estado con menor intervención en la economía

nacional, que cede espacio al libre mercado como regulador de las relaciones no sólo económicas sino también sociales, políticas y culturales.

El TLC expresa la consolidación de la tendencia neoliberal que ya ha demostrado sus enormes limitaciones, y esta tendencia se convertiría en permanente y prácticamente en la única vía de “desarrollo” permitida.

El pueblo costarricense es bombardeado todos los días con una millonaria campaña mediática aparentemente financiada por las grandes transnacionales farmacéuticas y respaldada por la Casa Presidencial, el Comex y el grupo Por Costa Rica, una fundación creada por los ex-negociadores del TLC.

La lucha contra el TLC está llevando a una enorme diversidad de grupos y personas a confluir en una gran alianza que va más allá de preocupaciones e intereses sectoriales: es la defensa de Costa Rica como nación soberana, la oportunidad de revisar y mejorar el modelo del Estado Social de Derecho, la posibilidad de pensar el país a futuro. Se está dando un grave proceso de criminalización de la protesta social, y de represión y hostigamiento contra quienes abiertamente manifiestan sus dudas respecto al Tratado.

Costa Rica es probablemente el país centroamericano que tiene más que perder con el TLC (por su alta nivel de inversión social y buena calidad de vida) y está hoy en un momento histórico.

(Edición: *Laura Carlsen, IRC.*) ❖

La especulación mexicana del maíz

Según Luis Hernández Navarro, editor e investigador en asuntos rurales, el aumento del precio de la tortilla, alimento fundamental de los mexicanos, se debe a tres razones básicas: el acaparamiento y especulación de maíz blanco por parte de los grandes monopolios industriales; el incremento en insumos básicos para la producción, traslado e industrialización del grano (diesel, electricidad y gasolina); la subida del precio del maíz en el mercado mundial por su uso en la producción de etanol.

“México es el cuarto productor mundial de este cereal”, afirma Luis Hernández.

“El año pasado cosechó 22 millones de toneladas, principal aunque no exclusivamente de grano blanco. Es un volumen muy lejano al producido por Estados Unidos: 280 millones de toneladas durante 2005, en lo esencial de maíz amarillo. Ese país controla más de 70% del mercado mundial de esta semilla.”

Antes del TLCAN, las dependencias gubernamentales regulaban los mercados, acopiaban, importaban y distribuían maíz.

Eso se acabó tras la firma del TLCAN. A partir de 1998, el presidente Zedillo le brindó en charola de plata a las grandes empresas como Maseca, ligada a ADM, en asociación con Cargill, Corn Products Internacional y Arancia, el monopolio del mercado nacional.

Industrializan el maíz, acaparan el grano local y lo importan. Controlan así la oferta y la demanda a tal punto que, pese a que “el precio del maíz en el mercado mundial ha aumentado en los meses recientes como resultado de la utilización del grano para elaborar etanol, ese incremento no tiene relación con el precio que tiene en México. En la Bolsa de Chicago se cotiza en unos 144 dólares la tonelada, esto es, menos de la mitad de la cantidad a la que se vende en la ciudad de México. El costo del diesel, la gasolina y la electricidad, todos ellos insumos necesarios para el transporte y el procesamiento del grano, subieron durante los últimos meses del gobierno de Fox, impactando el precio de la tortilla. Pero esos insumos constituyen sólo 30% de los costos de producción”.

La conclusión es que se conjuntan varios factores para el encarecimiento desmedido que tiene en México, pero a fin de cuentas es la especulación propiciada por el modelo establecido por el TLCAN, con su desmantelamiento de agencias estatales y regulaciones, la que impone la devastación del agro mexicano en manos de transnacionales que cobran el haber puesto en el poder a un nuevo paladín de la derecha en América Latina: Felipe Calderón.

La paradoja es que los campesinos indígenas autónomos, con sus siembras locales propias, han sentido menos el impacto de estos extremados vaivenes. En cambio, las clases populares urbanas se hunden en una crisis que tendrá serias repercusiones si al aumento en el precio del maíz se le suman los otros muchos aumentos y los recortes presupuestales en el gasto social. ❖

El mar de la soja transgénica llega a Venezuela

Una nueva alianza entre el gobierno venezolano y el llamado rey de la soja argentina, Gustavo Grobocopatel, por más de 400 millones de dólares, implica la siembra de 100 mil hectáreas con soja en los próximos cuatro años, con la idea de alcanzar “un millón de hectáreas” sembradas. (Argentina siembra 16 millones y Brasil 45 millones de hectáreas de soja.) El pacto creó una nueva empresa, derivada de Petróleo de Venezuela (PDVSA), que tendrá por nombre PDVSA-Agrícola y cuyo gerente será Grobocopatel mismo.

Esta alianza fue impugnada desde que se perfiló —primero con la visita de Grobocopatel a Venezuela, y luego en la Cumbre de Mar del Plata. En esta reunión, justo cuando Chávez hablaba apareció un enorme cartel que rezaba: “Con soja no hay alba”. Según Jorge Eduardo Rulli del Grupo de Reflexión Rural (GRR), Chávez “no podía dejar de ver el cartel de ocho metros de largo que se movía con abierta complicidad de muchos de los presentes, según donde fuera su mirada, mirada que obstinadamente trataba de dirigirse hacia el sitio contrario”.

Rulli resalta la contradicción entre el discurso venezolano y su impulso a los transgénicos: “mientras el comandante Chávez se juramentaba ante la Vía Campesina que no iba a dejar entrar los transgénicos a Venezuela, en el metro de Caracas se le repartía a la gente volantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología afirmando el disparate científico de que los alimentos transgénicos eran más saludables que los comunes... Venezuela está contra la producción de biocombustibles, en especial porque dispone de petróleo y combustibles que le interesa venderlos, pero toda su práctica y su modelo es de producción en grandes escalas y la aplicación de tecnologías similares a las que en otros países conducen inexorablemente a poner la agricul-

tura al servicio de producir combustibles para reemplazar el petróleo”. Rulli continúa: “Tenía razón Grobocopatel, visionario del socialismo del siglo XXI y amigo de la revolución bolivariana. Grobocopatel, el mayor contaminador de Carlos Caseres, localidad de la Provincia de Buenos Aires, donde nos bastó ver las casas abandonadas en torno a sus inmensos silos en el centro del pueblo y recoger las memorias acerca de los innumerables muertos de cáncer que ha dejado el polvillo, para comprender con qué amasa su fortuna este capitalista rapaz... al que le gusta sobreactuar llamándose a sí mismo un ‘sintiertras’ en grotesca comparación con los campesinos del Brasil, porque debe

arrendar la tierra de otros para trabajarla, debido a que no tiene la suficiente tierra propia. No se apresuren a compadecerse, por favor. El hombre termina reconociendo tener en producción unas 150 mil hectáreas arrendadas para soja y maíz transgénicos... Yo multiplicaría por cuatro esa cantidad de tierras y es posible que me quedara corto...”

El convenio de Chávez es con un consorcio de empresarios rurales, encabezados por Los Grobo, empresa de la familia Grobocopatel, por el cual cobrarán unos 120 millones de dólares anuales. Una “transfe-

rencia tecnológica similar a la que en general los Grobo hacen en Argentina. Ellos no compran la tierra sino que hacen el gerenciamiento de la explotación, le dicen al productor qué hacer y cómo hacerlo, cuándo fumigar o qué productos usar. Eso exactamente harán con Venezuela”, señala Marcelo Cantón (*Clarín*, 8 de marzo).

Lo más enredoso del asunto es que aunque según diversas fuentes el mandatario venezolano pidió como condición que la soja incluida en la transferencia tecnológica no fuera transgénica, lo real es que los paquetes de insumos argentinos se basan en semillas transgénicas que, por lo demás, cuentan con patentes propiedad de Monsanto. ♣



Paraguay

“Legítiman” la treta de los servicios ambientales

Por toda América Latina, por lo menos, diferentes estrategias de enajenación, privatización y lucro se tienden contra pueblos y comunidades rurales. Unas avanzan primero en Argentina o Brasil, otras se prueban primero en México, Ecuador, Colombia o Bolivia. El caso de los servicios ambientales es ya conocido en México y otros países de la región como un es-

quema mañoso mediante el cual los gobiernos ofrecen retribuciones a los campesinos para que cuiden sus bosques o sus recursos acuíferos. Tras una primera etapa que parece “hacer justicia” al esfuerzo de cuidado que durante siglos han tenido las comunidades, el siguiente paso es someter esos pagos a esquemas de bonos cambiarios que juegan en las bolsas de valores mundiales. En México, en particular, tras los “pagos” se esconden contratos mañosos que exigen que los pueblos y comunidades renuncien al manejo

que han tenido por siglos y lo enajenen a las dependencias gubernamentales, que después ceden este manejo a empresas transnacionales cuya mira son las riquezas de los territorios indios.

Ahora, la secretaría del Ambiente de Paraguay se apresta a poner en marcha la reglamentación, mediante decreto presidencial, para valorizar y retribuir los servicios ambientales. Según los funcionarios, se trata de “generar incentivos económicos para conservar y proteger los bosques en aquellas

propiedades que posean una superficie mayor al 25% de cobertura forestal natural, que los técnicos se encuentran trabajando en la reglamentación de la referida normativa ambiental con el fin de implementar un mecanismo para la emisión de ‘bonos verdes’ que generarán recursos económicos para beneficiar a los propietarios

que cumplen con la Ley”, bonos que al igual que en los programas de otros países se emitirán para “ser comercializados en la bolsa de valores de donde provendrán los fondos destinados a los propietarios que conserven sus bosques”. El esquema impone requisitos de registro único forestal, y la “aplicación de mecanismos finan-

cieros para motivar aquellas actividades que contribuyan a la conservación y protección de los bosques, la preservación de la biodiversidad, la captación de carbono, el cuidado de suelos y de recursos hídricos”. Las empresas transnacionales se lamen ya los bigotes para ser quienes instrumenten esos jugosos negocios. ❖

24

Monsanto, la policía de las semillas

El Centro de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos en su informe *Monsanto contra los productos estadounidenses*, afirma que la compañía de agroquímicos y semillas tiene puestas demandas contra 190 agricultores por la supuesta utilización “ilegal” de sus semillas transgénicas patentadas.

Para sustentar sus acusaciones, la empresa realiza investigaciones en el terreno que “orillan a los agricultores a cambiar su modo de

cosechar. El resultado es una agresión a los procedimientos tradicionales que han perdurado por siglos”.

La transnacional emprende tres etapas para proceder a un juicio contra los “transgresores”: investigar a los sospechosos de transgredir las patentes, realizar acuerdos extrajudiciales o llegar al litigio contra quienes la compañía considera que violaron su propiedad privada.

Hasta el momento 147 agricultores y 39 pequeñas

empresas están sujetas a demanda después de que sus cultivos se contaminaron con polen o semillas transgénicas. A Monsanto no le importa si fue sin premeditación o si nunca se firmó un contrato.

El Centro de Seguridad Alimentaria asegura: “conforme aumentan los productores sometidos a hostigamiento, investigación y acusación por parte de la empresa a partir de un supuesto incumplimiento de las regulaciones de patentes de semillas y uso de tecnología, deberá ejercerse

mayor presión para revocar las políticas gubernamentales que sustentan dicha persecución”.

Si bien la empresa cuenta con los dispositivos legales, es obvio que saca ventaja de la forma natural en que se polinizan las especies vegetales, es decir, de la contaminación que sus técnicas provocan.

Teniendo interés, artilugios legales y fuerza policiaca, lucra adicionalmente de contaminar, hostigar, investigar y someter a juicio a quienes les resulte conveniente. ❖



¿Arroz con proteínas humanas?

Un plan para cultivar las primeras plantas modificadas por vía genética destinadas a producir proteínas humanas recibió la aprobación preliminar en Estados Unidos.

La producción comercial de arroz que contiene genes que se encuentran en la leche materna podría comenzar en los próximos meses.

El arroz se refinará para su uso en medicinas contra la diarrea, la deshidratación y otras enfermedades que causan un gran número de muertes infantiles cada año.

El Departamento de Agricultura estadounidense le dio el visto bueno inicial a la propuesta de la empresa Ventria Bioscience, con sede en California.

Sin embargo, diversas organizaciones de defensa del ambiente y algunos grupos de producción de alimentos se oponen al plan. “Me preocupa mucho porque, en primer

lugar, este arroz podría ir a parar a la cadena de alimentos y, en segundo lugar, no se ha puesto a prueba”, dijo Bill Freese, del Centro Estadounidense para la Seguridad de los Alimentos. “No ha pasado un proceso de evaluación farmacológica. Estamos ante algo desconocido, que podría dañar la salud humana”, añadió.

Ventria Bioscience insiste en que no hay riesgo de que otros cultivos se contaminen.

El público estadounidense tiene hasta finales de marzo para presentar objeciones al plan, según informó la agencia de noticias Associated Press. Si recibe la aprobación final, la empresa podría sembrar 1 215 hectáreas del arroz transgénico en el estado de Kansas, a partir de abril o mayo, dijo el presidente de Ventria Bioscience, Scott Deeter.

Glifosato en la frontera Ecuador-Colombia

Es guerra, no accidente

El gobierno colombiano autorizó sembrar en cuatro de sus 33 departamentos dos clases de maíz transgénico, uno de los cuales es resistente al herbicida con que rocían vastas extensiones para destruir cultivos de coca, pero que también se utiliza como disuasivo para vaciar una ancha franja fronteriza entre Ecuador y Colombia, como parte de una estrategia de guerra genocida que ocasiona letales

daños a personas y propiedades y homicidio culposo como consecuencia de la fumigación según la frontera con el Ecuador... De acuerdo con el contrato, el Departamento de Estado [estadounidense] indemnizará a DynCorp International por obligaciones a partes terceras, siempre y cuando haya fondos a mano”.

En junio de 2005, una Misión Internacional en que participaron siete organizaciones internacionales y catorce ecuatorianas que recorrieron Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, a lo largo de la frontera del lado ecuatoriano, recabó datos y testimonios con autoridades civiles, religiosas, policiales y militares, funcionarios de gobierno y población en general, sobre la situación de inseguridad, desplazamiento, contaminación, enfermedad, hostigamiento y asesinato. Desde entonces, la Misión hacía la siguiente reclamación: “Es urgente que el Estado ecuatoriano transparente los términos en que está manejando las relaciones con Colombia. Debe aclararse si existen convenios que permitan sobrevuelos de aeronaves colombianas de fumigación o combate en el espacio aéreo ecuatoriano. Si es así, esos convenios deben revisarse inmediatamente, pues algunos pobladores han sido víctimas de fumigaciones, ametrallamientos y constantemente sienten miedo y se inquietan al escuchar los helicópteros, las bombas, los disparos. De no existir los convenios, es urgente que se promueva una nota diplomática para que Colombia respete el espacio aéreo y la inviolabilidad del territorio ecuatoriano y repare los daños económicos y morales causados a las víctimas de sus actuaciones bélicas”.



Foto: Jerónimo Arteaga

mente contra la biodiversidad agrícola y forestal que fue utilizada sustentablemente durante siglos por las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas”.

En este escenario, la autorización de la siembra de un maíz transgénico resistente al glifosato, parece una medida incluso cínica en un momento en que el gobierno de Ecuador sostiene una querrela contra el gobierno de

daños humanos, ambientales y agrícolas. Las fumigaciones con glifosato producido por Monsanto, obedecen a un programa financiado por Estados Unidos, operado por DynCorp International —impugnada por sus ligas con paramilitares colombianos—, empresa privada que provee servicios técnicos (incluidos militares) al gobierno de EUA en el Ecuador, Colombia, Irak, Afganistán, y muchos otros países. En el Ecuador administra la Base del ejército estadounidense en Manta.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo Colombia, una instancia no gubernamental integrada por juristas, artistas, humanistas y activistas, emitió el primero de marzo un comunicado donde expresa: “las políticas promovidas e impuestas por el Estado colombiano intentan grave-

Bogotá por las fumigaciones, que se habían suspendido y se reanudaron a fines de 2006.

El vicepresidente ecuatoriano, Lenin Moreno afirmó que “en el Tribunal de La Haya se van a presentar las pruebas... para que el gobierno colombiano ... haga la correspondiente compensación por el daño causado a los recursos materiales y fundamentalmente a los humanos” del lado ecuatoriano de la frontera.

Moreno fue demasiado cauto al señalar que el glifosato llega a Ecuador por efecto del viento.

Desde 2001, la misma Dyncorp, encargada de las fumigaciones de “plantas narcóticas” en Colombia, reconoce que fue puesta “una demanda en Washington DC, por 100 millones de dólares de parte de 10 mil ciudadanos del Ecuador quienes alegan da-

ños a personas y propiedades y homicidio culposo como consecuencia de la fumigación según la frontera con el Ecuador... De acuerdo con el contrato, el Departamento de Estado [estadounidense] indemnizará a DynCorp International por obligaciones a partes terceras, siempre y cuando haya fondos a mano”.

En junio de 2005, una Misión Internacional en que participaron siete organizaciones internacionales y catorce ecuatorianas que recorrieron Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, a lo largo de la frontera del lado ecuatoriano, recabó datos y testimonios con autoridades civiles, religiosas, policiales y militares, funcionarios de gobierno y población en general, sobre la situación de inseguridad, desplazamiento, contaminación, enfermedad, hostigamiento y asesinato. Desde entonces, la Misión hacía la siguiente reclamación: “Es urgente que el Estado ecuatoriano transparente los términos en que está manejando las relaciones con Colombia. Debe aclararse si existen convenios que permitan sobrevuelos de aeronaves colombianas de fumigación o combate en el espacio aéreo ecuatoriano. Si es así, esos convenios deben revisarse inmediatamente, pues algunos pobladores han sido víctimas de fumigaciones, ametrallamientos y constantemente sienten miedo y se inquietan al escuchar los helicópteros, las bombas, los disparos. De no existir los convenios, es urgente que se promueva una nota diplomática para que Colombia respete el espacio aéreo y la inviolabilidad del territorio ecuatoriano y repare los daños económicos y morales causados a las víctimas de sus actuaciones bélicas”.

Por su parte, el investigador francés Robert Bellé, advirtió que el glifosato provoca las primeras etapas de la cancerización.

“Cuando se pulveriza en avionetas o hasta en un atomizador manual, la mezcla es cien veces más concentrada que aquella que puede desregular el funcionamiento de las células. Las aspersiones aéreas son una catástrofe. Es una locura pulverizar con avión”. ✎

Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria

Declaración de Nyéléni

Nyéleni, Selingué, Malí, 27 de febrero de 2007. Nosotros y nosotras, más de 500 representantes de más de 80 países, organizaciones campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas y sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas y urbanos, nos reunimos para fortalecer el movimiento global por la soberanía alimentaria. [...] Nuestro trabajo tiene el nombre de Nyéléni, inspirados en la leyendaria campesina maliense que cultivó y alimentó a su gente.

La mayoría de nosotros producimos alimentos, somos capaces y tenemos la voluntad de alimentar a todos los pueblos del mundo. Nuestra herencia como cultivadores de alimentos es fundamental para el futuro de la humanidad: particularmente las mujeres y los pueblos indígenas, creadores de saberes ancestrales agrícolas y alimentarios subvalorados.

Tal herencia y capacidad de producir alimentos nutritivos, de calidad y abundantes, es amenazada y socavada por el neoliberalismo y el capitalismo globales.

La soberanía alimentaria nos da esperanza y poder para conservar, recuperar y desarrollar nuestros saberes y nuestra capacidad de producir alimentos.

Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable, ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo [...] Es una estrategia para resistir y dismantelar el libre comercio corporativo y su régimen alimentario actual, encauzando los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que sean gestionados por quienes los producimos a nivel local. Es darle prioridad a las economías y mercados locales y nacionales, a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional. Es promover un comercio transparente, que garantice ingresos dignos a todos los pueblos, y el derecho de los consumidores de controlar su propia alimentación y nutrición. Es garantizar que los derechos de acceso y gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y biodiversidad estén en manos de quienes producimos los alimentos. Supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdad entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

Hemos intercambiado experiencias de las luchas de nuestros movimientos por conservar la autonomía y recuperar nuestro poder. Necesitamos crear un movimiento y promover nuestra visión colectiva. Luchamos por un mundo donde:

* Todos los pueblos, naciones y Estados puedan decidir sus propios sistemas alimentarios y políticas que nos

brinden alimentos de calidad, adecuados, asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados.

* Se reconozcan y respeten los derechos y el papel de las mujeres en la producción de alimentos y en la representación en todo los órganos de toma de decisiones.

* Todos los pueblos de nuestros países vivan con dignidad de su trabajo, y tengan oportunidad de vivir en sus lugares de origen.

* La soberanía alimentaria sea un derecho humano básico, reconocido y respetado por comunidades, pueblos, Estados e instituciones internacionales.

* Podamos conservar y rehabilitar los entornos rurales, las zonas pesqueras, los alimentos tradicionales, basados en la gestión sustentable de tierra, suelo, agua, semillas, ganado y biodiversidad.

* Valoremos, reconozcamos y respetemos la diversidad de nuestros saberes, alimentación, lenguas y culturas tradicionales; el modo en que nos organizamos y expresamos.

* Exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice a las comunidades pesqueras acceso y control de las zonas de pesca y ecosistemas, reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo, garantice empleos dignos con sueldos justos y derechos laborales para todos los trabajadores, y un futuro para los jóvenes del campo, donde las reformas agrarias revitalicen la interdependencia entre productores y consumidores, garanticen la supervivencia de la comunidad, la justicia económica y social, la sustentabilidad ecológica y el respeto a la autonomía local y la gobernanza con igualdad de derechos para mujeres y hombres.

* Se garantice el derecho a los territorios y a la autodeterminación de nuestros pueblos.

* Compartamos nuestros territorios en paz y de manera justa entre nuestros pueblos, seamos campesinos, comunidades indígenas, pescadores artesanales, pastores nómadas u otros.

* En las catástrofes naturales y provocadas por las personas, y en las situaciones posteriores a los conflictos, la soberanía alimentaria actúe como auténtica garantía que fortalezca los esfuerzos de recuperación local y mitigue el impacto negativo. Donde se tenga presente que las comunidades afectadas desamparadas no son incapaces, y donde una sólida organización local por medios propios sea la clave para la recuperación.

* Se defiendan el poder de los pueblos para decidir sobre sus herencias materiales, naturales y espirituales.

Luchamos contra:

* El imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, y todo sistema que empobrezca la vida, los recursos, los ecosistemas; contra los agentes que los promueven como las instituciones financieras interna-

cionales, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las corporaciones multinacionales y los gobiernos que perjudican a sus pueblos.

- * El *dumping* de alimentos a precios por debajo de su costo de producción en la economía global.
- * El control de nuestros alimentos y de nuestros sistemas agrícolas en manos de compañías que anteponen las ganancias a las personas, la salud y el ambiente.
- * Tecnologías y prácticas que erosionan nuestra capacidad de producción alimentaria futura, dañan el ambiente y ponen en peligro nuestra salud: los cultivos y animales transgénicos, la tecnología *terminator*, la acuicultura industrial y las prácticas pesqueras destructivas; la llamada Revolución Blanca industrial en el sector lácteo, las Nueva y Vieja Revoluciones Verdes, los Desiertos Verdes de los monocultivos de biocombustibles industriales y otras plantaciones.
- * La privatización y la mercantilización de nuestros alimentos, servicios básicos públicos, saberes, tierras, aguas, semillas, ganado y patrimonio natural.
- * Proyectos/modelos de desarrollo e industrias extractivas que desplazan a los pueblos y destruyen nuestro ambiente y herencia natural.
- * Guerras, conflictos, ocupaciones, bloqueos económicos, hambrunas, desplazamientos forzados y confiscación de

tierras; todas las fuerzas y gobiernos que los provocan y los apoyan; los programas de “reconstrucción” tras un conflicto o catástrofe que destruyen nuestro ambiente y nuestras capacidades.

- * La criminalización de quienes luchan por proteger y defender nuestros derechos.
- * La ayuda alimentaria que encubre el *dumping*, introduce OGM en los entornos locales y los sistemas alimentarios y crea nuevos patrones de colonialismo.
- * La internacionalización y globalización de los valores paternalistas y patriarcales que marginan a las mujeres y a las diversas comunidades agrícolas, indígenas, pastoriles y pesqueras en el mundo.

Nos comprometemos a construir nuestro movimiento colectivo forjando alianzas, apoyando nuestras diferentes luchas y haciendo que nuestra solidaridad, fuerza y creatividad lleguen a los pueblos de todo el mundo que tienen un compromiso con la soberanía alimentaria. Cada lucha por la soberanía alimentaria, sin importar en qué lugar del mundo se libre, es nuestra lucha [...]

¡Es hora de soberanía alimentaria!

Esta es una versión abreviada. Ver la versión completa en <http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/21721>



Piratas: la nueva generación

El libro *Pacific Genes and Life Patents*, de Aroha Te Pareake Mead y Steven Ratuva, publicado por la Universidad de Naciones Unidas, es una recopilación de casos en que investigadores y compañías farmacéuticas, sobre todo estadounidenses y australianas cometen actos de piratería genética contra las comunidades isleñas del Pacífico Sur.

En la presentación del libro, la investigadora maorí, Aroha Mead relató en entrevista a la agencia Efe, que la tribu hagahai, de Papúa, Nueva Guinea, ha sido una de las más saqueadas, desde que en 1989 aceptó donar sangre para análisis,

cuyas muestras salieron del país y se sometieron a procedimientos desconocidos.

En 1993, afirma la agencia Efe, “la investigadora estadounidense Carol Jenkins, junto con el Departamento de Salud de Estados Unidos, solicitaron una patente sobre líneas de células T de 24 individuos hagahai, aduciendo que eran útiles para tratar y diagnosticar aquellas personas infectadas con un virus asociado con la leucemia y una enfermedad neurológica”.

Si bien por gestiones del gobierno de Papúa se consiguió frenar la solicitud de patente, el material genético de los hagahai “está a la venta, accesible para cual-

quiera que pueda pagar 216 dólares”, continúa la nota de Efe.

El libro relata otros casos semejantes ocurridos en las Islas Solomon y uno muy grave en las Islas Cook donde a la población local, que se sabe padece la llamada diabetes tipo 2 estuvieron a punto de transplantarle células pancreáticas de cerdos como tratamiento (bajo la suposición de que ésta era la solución).

Por fortuna, el gobierno neozelandés intervino y el procedimiento hubo de suspenderse.

No obstante, un año después la empresa neozelandesa Diatranz intentó ir adelante con el experimento, sin pedir permiso a los individuos, con el contubernio

del gobierno de las Islas Cook. Pero los habitantes, alertados ejercieron una presión comunitaria de tal magnitud que la empresa tuvo que retirarse.

Por desgracia, conforme el patentamiento de la vida y las soluciones de biología sintética cobran fuerza, la tentación de probar sus nuevas “curas” en poblaciones no informadas de las repercusiones, o de sacar muestras sanguíneas para utilizar el material genético de maneras poco claras, sin supervisión, información o consentimiento previos, nos alerta a redoblar esfuerzos por impedir cualquier intento por apoderarse de la diversidad biológica y cultural de cualquier pueblo del mundo. ✎

Los desastres que vienen por la Hidrovía Paraguay-Paraná

Entrevista con Elba Stancich

28

La Hidrovía Paraguay-Paraná consiste en hacer navegables 3 400 kilómetros de río las 24 horas, los 365 días del año, para “convoys” o “trenes” de 20 barcasas o más y de 16 barcasas desde Asunción al Norte. El objetivo es abaratar los costos de transporte y hacer más rápidos los recorridos. Se han hecho varios estudios para realizar el proyecto; los primeros se entregaron en 1995 pero fueron ampliamente criticados, no sólo por organizaciones ecologistas, sino también por muchos académicos y organismos técnicos de los propios gobiernos que dictaminaron que estos estudios no eran suficientes como para tomar una decisión y tener la certeza de que las obras propuestas no iban a tener impactos ambientales de consideración. Esto llevó a realizar un estudio complementario, aprobado por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) en julio de 2005, pero que de ninguna manera reemplaza un Estudio de Impacto Ambiental, que es fundamental para todo el conjunto de las obras propuestas. Los impactos de este proyecto no deberían analizarse por partes —que cada país analice el tramo que le corresponde—, sino que dadas las características y la extensión del proyecto, debe ser analizado integralmente y considerar los impactos acumulativos e indirectos.

Los ríos Paraguay y Paraná son navegables desde siempre. Obviamente estamos de acuerdo con que los ríos sean utilizados para

la navegación; lo cuestionable del proyecto es la escala. Son enormes los volúmenes a transportar y también es importante el tamaño y la frecuencia de la navegación. El río en sí mismo es muy caudaloso, muy grande. Pareciera que podemos hacer cualquier cosa y que no va a traer consecuencias. Sin embargo, sabemos que no es así. Habría que tener en cuenta para qué clase de modelo económico hace falta modificar los ríos para la navegación; y esto es para un modelo agro-exportador de gran escala.

En los últimos años en nuestro país y en los demás países que conforman la Cuenca del Plata ha avanzado muchísimo la frontera agrícola, y esto ha traído como consecuencia la deforestación, pérdida de bosques nativos y gran pérdida del ecosistema del Cerrado en el caso de Brasil. Esto implica cada día mayor expulsión de pequeños y medianos agricultores, que se ven literalmente corridos por la producción de tipo empresarial a mayor escala. La concentración de grandes empresas, por ejemplo en el área de Rosario, tuvo en los últimos años una inversión millonaria para todo lo que es el complejo aceitero basado en la soja, lo cual trajo aparejado impactos ambientales de consideración por la utilización de agrotóxicos, la repercusión de los mismos sobre el cuidado del suelo y del agua, pérdida de nutrientes, las transformaciones en las áreas urbanas y el deterioro de la calidad de vida de las personas que viven cerca de estas empresas.

Hasta el día de hoy, donde la hidrovía funciona a pleno, en el tramo Santa Fe-Océano, no conocemos que el gobierno haya entregado ni hecho público ningún estudio de impacto ambiental, evaluado como corresponde por la Secretaría de Ambiente de la Nación. Sabemos que se está analizando un estudio de impacto ambiental presentado por la empresa concesionaria del dragado, para la profundización a 36 pies, pero todavía no finaliza el proceso evaluatorio. Mientras tanto, el tramo que desde hace diez años se utiliza intensamente y hoy tiene 34 pies de calado, carece de estudios ambientales a esa profundidad y el Órgano de Control supuestamente se está conformando luego de unos diez años de inexistencia.

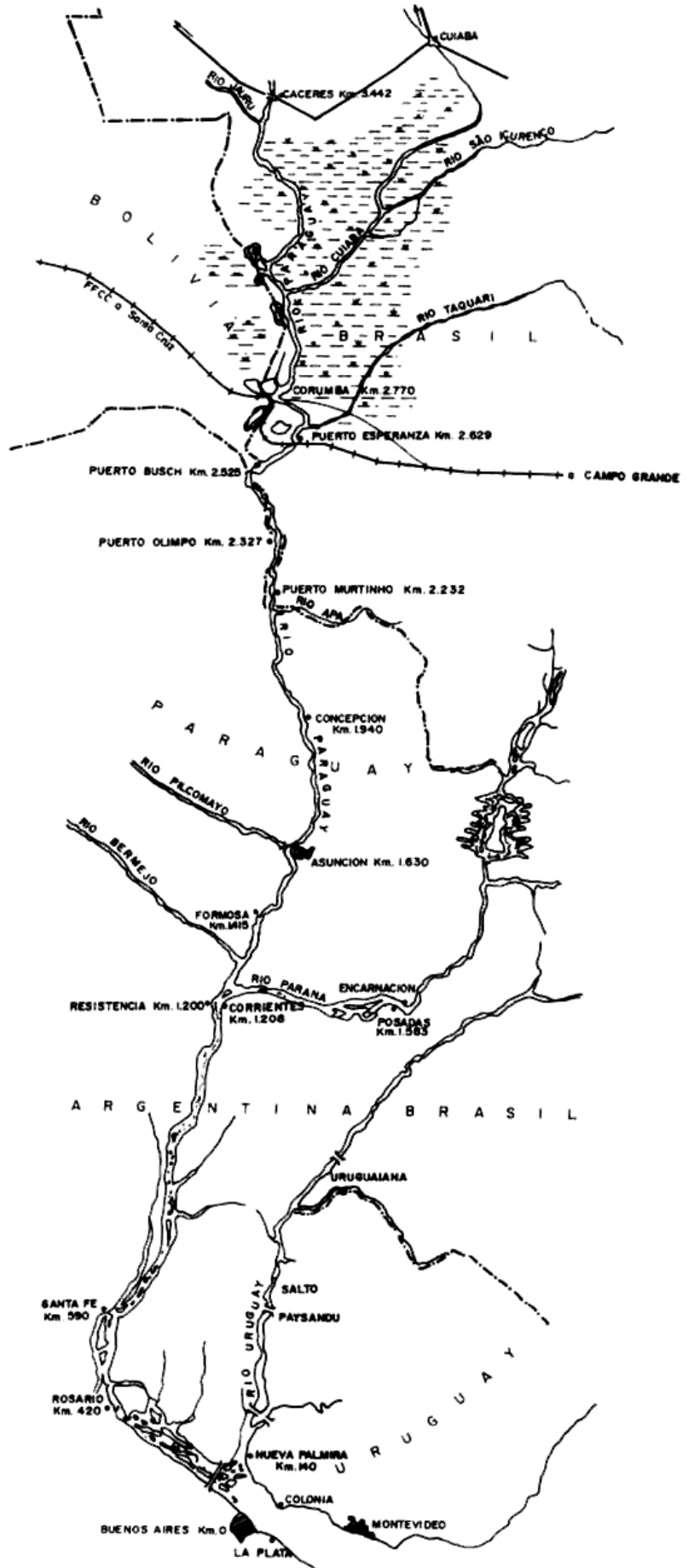
Es un proyecto para favorecer un modelo de extracción de recursos que no beneficiaría a la población que hoy está en condiciones de pobreza o de marginalidad en nuestros países... Esta población será la más afectada, porque va a ser expulsada o porque los recursos naturales van a quedar cada vez más deteriorados.

Este proyecto ahora se vuelve a reflotar como uno de los ejes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, es decir IIRSA. Dentro de los diez ejes que plantea la iniciativa IIRSA uno es la Hidrovía Paraguay-Paraná; o sea que está enmarcada dentro de este nuevo impulso. Es una serie de megaproyectos que lanzan los doce gobiernos de América del Sur directamente ligados con otra cantidad de proyectos de infraestructura como grandes carreteras e intervenciones propuestas para la región.

La Hidrovía está dentro de este nuevo mapa que se ofrece en la región en cuanto proyecto de infraestructura. Son proyectos con un objetivo de extracción de materias primas desde lugares inaccesibles para que los fletes sean más baratos y que el tiempo de transporte sea lo más rápido posible. En definitiva es un proyecto para favorecer un modelo de extracción de recursos que justamente no beneficiaría a la población que hoy está en condiciones de pobreza o de marginalidad en nuestros países. Más bien todo lo contrario: esta población será la más afectada, ya sea porque va a ser expulsada o porque los recursos naturales van a quedar cada vez más deteriorados.

Por eso cuando nos encontramos frente a este tipo de proyectos siempre hay que preguntarse quién va a salir favorecido. Los más beneficiados van a ser principalmente los grandes grupos empresarios.

Los primeros estudios del proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Fonplata; el principal actor en ese momento fue el BID. Pero luego el BID se retiró del



Fuente: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

proyecto Hidrovía diciendo que no iba a financiar el proyecto por considerar que las obras traerían profundos impactos ambientales. El nuevo actor que se perfila ahora en la región es la Corporación Andina de Fomento (CAF), que de hecho es la que ha financiado los últimos estudios.

Hay que prestar mucha atención al volumen y a la escala del proyecto, e imaginarnos cómo va a ser el escenario a diez o veinte años, pensando en el tipo de producción, porque las principales cargas que se quieren transportar por la Hidrovía son granos, que equivaldrían a 70 por ciento de las cargas, principalmente soja. Nuestro país pretende llegar a una producción de 100 millones de toneladas de grano, de la cual gran parte se pretende transportar por la Hidrovía, porque de hecho hoy en el país el porcentaje de lo que se transporta por agua es minoritario; la mayoría del transporte sigue siendo por carretera, una proporción inferior por ferrocarril y una mucho menor por agua. Entonces lo que se pretende además de aumentar la producción es derivar mayores cargas por los ríos. Si uno se imagina la situación a 20 años, la frecuencia y escala de navegación que va a haber en nuestros ríos realmente va a ser enorme y esto es a lo que tenemos que prestar atención. Hay zonas del río Paraguay, por ejemplo, que son muy delicadas; muy cerca del Pantanal algunos expertos dicen que para que el ecosistema pueda soportar la navegación tendría que estar pasando sólo un tren de barcazas por semana, de manera tal que la naturaleza pueda restablecer todo lo que es el ecosistema acuático sin que la navegación lo afecte. Pero con la carga que hay proyectada por día podrían estar pasando 8 o más trenes de 20 barcazas cada

uno. Todo esto no está profundizado en los estudios; creo que vale la pena ponerlo en debate y analizar mucho más. Cuál va a ser el impacto sobre la pesca, sobre la calidad del agua, sobre los sedimentos, la selva en galería que hoy sigue siendo destruida por la navegación en tramos del río Paraguay en el Pantanal. Entonces por lo menos deberíamos cuestionarnos qué pasa con éste desarrollo basado en el crecimiento y pensar que en un planeta con recursos finitos es imposible estar hablando de crecimiento



La Hidrovía en el Cono Sur

continuo, porque simplemente no es posible y se están generando muchos daños.

Otro punto a tener en cuenta son los estudios complementarios que se terminaron en 2005 y que el nuevo proyecto tiene algunas diferencias significativas con respecto a la propuesta anterior de 1996. Ahora se extiende, por lo menos en teoría, hasta Corumbá o sea que de los 3 400 km originales se acorta algo más de 600 kilómetros a lo largo del Pantanal.

Pero de todos modos hay un punto que nos sigue preocupando: la extracción de rocas en el lecho del río Paraguay. Esto se da en un tramo del río donde hay

seis puntos en los cuales es necesario extraer lecho rocoso para permitir la navegación ininterrumpida. En dos de esos puntos es necesario sacar las rocas con explosivos; pero en estudios anteriores varios expertos advirtieron que volar rocas en el lecho del río Paraguay podría provocar efectos irreversibles sobre los humedales, tanto aguas arriba como aguas abajo. Si nosotros hablamos de impacto sobre los humedales estamos hablando de impactos directos sobre la gente porque hay muchísima población ribereña, tanto pueblos indígenas como pescadores, que dependen directamente de la productividad biológica de estos humedales y además hay mucha población que se beneficia de la depuración natural que ejercen estos humedales sobre aguas contaminadas. También está la amenaza de que se agraven las grandes inundaciones y sequías, ya que los humedales, y particularmente el Pantanal, actúan como un amortiguador o regulador, aspecto siempre minimizado por los impulsores del proyecto. Entonces si estamos pensando en que habrá daños sobre los humedales significa que va a ser afectada una gran cantidad de gente. En el diseño actual del proyecto, de las obras propuestas de Santa Fe al norte, lo más preocupante es la extracción de rocas en el tramo del río Paraguay entre la ciudad de Asunción y el río Apa. Son aspectos muy críticos que se deberían revisar.

La ingeniera **Elba Stancich**, del Taller Ecologista de Rosario, considerada una de las principales estudiosas del proyecto, fue entrevistada para Prensa Proteger durante el Quinto Taller sobre Instituciones Financieras Internacionales e IIRSA, que tuvo lugar en Santa Fe, 7 noviembre 2006, www.proteger.org.ar. Este texto puede reproducirse citando la fuente. Por favor dar previo aviso a comunicacion@proteger.org.ar

La investigación científico-campesina en la agricultura cubana

Francisco Dueñas, Carlos Moya, Marta Álvarez, Dagmara Plana, Humberto Ríos, Ileana Amat, Lizando Arias

El mejoramiento participativo de plantas (MPP) exige pensar en las necesidades humanas de una forma diferente e innovadora, que vaya mucho más allá del propósito de aumentar la productividad. Son centrales como propósitos el enriquecimiento de la biodiversidad y el “empoderamiento” de los usuarios.

En Cuba la agricultura sigue siendo la espina dorsal de su golpeada economía. Una de las consecuencias de la crisis económica es que la producción agrícola del país se está alejando del modelo basado en el monocultivo y la industrialización —orientado a la exportación azucarera y dependiente de altos insumos. Otra consecuencia es el rápido deterioro de los sistemas centralizados de producción, mejoramiento y distribución de semillas.

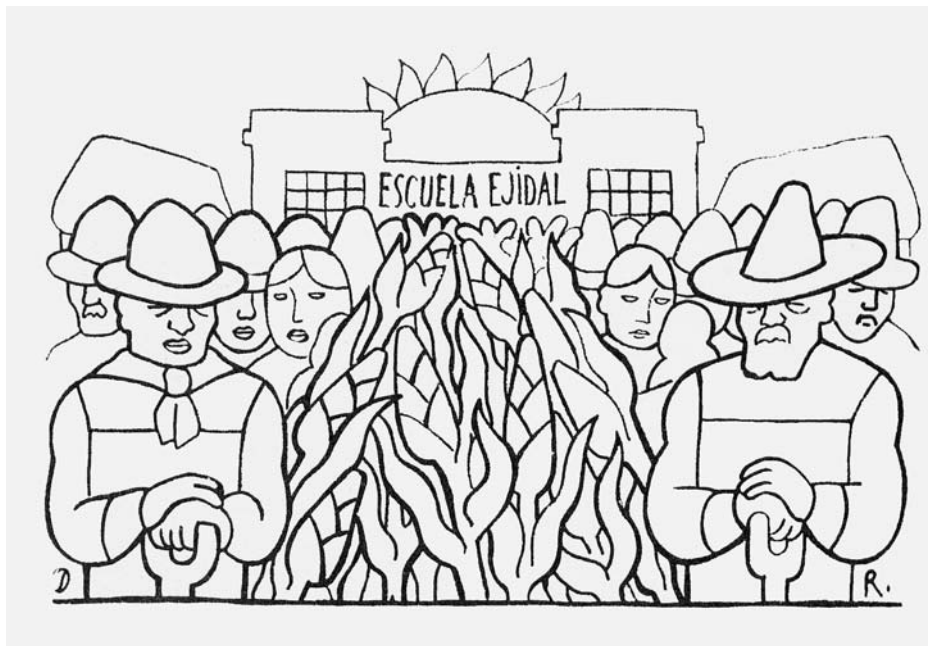
Estas circunstancias imprevistas se combinan para abrir una instancia don-

de los investigadores agrícolas y los responsables de políticas buscan alternativas en la producción, el mejoramiento y las prácticas de distribución de las semillas, como aporte crucial a la necesidad de construir un nuevo sector agrícola en el país.

En Cuba a fines de los noventa, el trabajo del fitomejoramiento participativo (FP) deviene en importante herramienta, con el fin de facilitar el flujo de semillas de los institutos de investigación hacia el agricultor y viceversa (Ríos y Wright, 2000). Las “ferias de agrobiodiversidad” han ayudado a mejorar el nivel de vida de estos campesinos y crean la base de una amplia y activa participación de los agricultores en el proceso de adopción y selección de sus propias variedades.

Entre los diversos cultivos, el tomate (*Lycopersicon esculentum* Mill.) es una de las principales hortalizas cultivadas

31



Francisco Dueñas, Carlos Moya, Marta Álvarez, Dagmara Plana y Humberto Ríos

pertenecen al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA).

Ileana Amat es parte de la Estación Territorial de Investigaciones Agrícolas de Holguín (ETIAH), Holguín.

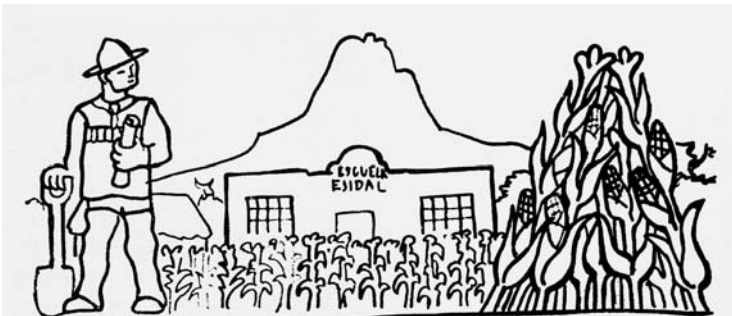
Lizando Arias es miembro del Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (Inivit), Camagüey.

Esta es una versión abreviada del documento completo. Para mayor profundización comunicarse con

Francisco Dueñas Hurtado <ranko@inca.edu.cu>

en nuestro país. Hace veinte años su producción se basaba en variedades foráneas que presentaban problemas de no adaptación al clima y susceptibilidad ante plagas y enfermedades, por lo que el mejoramiento se dirige a obtener variedades cubanas mejor adaptadas a nuestro clima y más resistentes a las plagas y enfermedades que más inciden en el cultivo. Son relevantes los resultados de los programas de mejora del Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical (Inifat), del Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliانا Dimitrova (IIHLD) y del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA).

El proyecto “Mejoramiento de la composición varietal del tomate en zonas campesinas de las regiones Occidental, Central y Oriental de Cuba”, contribuyó al acercamiento entre los investigadores del INCA, los campesinos y productores de esta hortaliza y los planificadores de políticas en las tres regiones en que se divide nuestro país, pues era ne-



cesario llevar semillas de nuestros materiales genéticos a zonas rurales donde el sistema formal de semillas no cubría la necesidad de campesinos y productores y conocer sus necesidades de capacitación en el manejo del cultivo.

Diagnóstico. Era necesario también conocer bien las localidades donde se iba a insertar el proyecto, y contar con una idea de las condiciones iniciales. Resultaba vital conocer las variedades con que contaban estos campesinos y productores en sus parcelas y las diferentes estrategias que empleaban para el manejo del cultivo, las semillas y la

selección. Esto nos permitió trazar un plan de trabajo conjunto para promover el uso, la conservación, el enriquecimiento del conocimiento, las innovaciones y prácticas de estas comunidades en los métodos y políticas que facilitarían estrategias de conservación y mejoramiento *in situ* de la biodiversidad de las fincas y parcelas.

El diagnóstico permitió identificar y acercarnos a líderes del cultivo en estas localidades que sirvieran de intermediarios en el intercambio o flujo de semillas, el conocimiento y la capacitación entre los demás pobladores de la comunidad.

Fue una herramienta muy útil conocer cuáles eran los nuevos criterios que ellos querían encontrar en los materiales que nosotros les ofrecíamos, y para nosotros fue necesario conocer las condiciones materiales de estos campesinos y productores en su trabajo y ver de qué manera nosotros los podríamos apoyar con recursos para mejorar sus condiciones laborales.

La importancia de extender los resultados. La realización de ferias de agrobiodiversidad es una de las maneras más nobles de hacer extensivos los resultados. Son eventos sociales donde los participantes tienen acceso a la diversidad del cultivo y seleccionan los materiales que más les gusten atendiendo a criterios muy propios. A los pocos días de terminada la feria se les entrega pequeñas cantidades de semillas de las variedades seleccionadas por ellos, lo que les permite incorporar este material a su diversidad y observar cómo se comportan estos nuevos materiales en sus fincas o parcelas. Esto permite que ellos mismos propicien el flujo o intercambio de semillas con otros campesinos de la zona.

A raíz de esta metodología un campesino del municipio La Palma, Pinar del Río sembró los materiales que había seleccionado en una de las ferias realizadas en las áreas experimentales de nuestro instituto, lo que dio paso a la organización y realización de la primera feria de agrobiodiversidad del cultivo del to-

mate, que se llevó a cabo durante tres años consecutivos (2003-2006), en las localidades involucradas en el proyecto.

Visión de género. En todo el mundo, las mujeres juegan un papel central en el manejo de la biodiversidad agrícola. En nuestro trabajo las mujeres jugaron un papel muy importante en la selección de las variedades en las áreas donde estaban sembradas.

Observamos frecuentes diferencias entre mujeres y hombres en los criterios de selección: las mujeres tienen en cuenta diversos aspectos relacionados con la calidad de los frutos —el color, sabor y forma—, que se explica por el uso que ellas le dan en las labores culinarias, mientras que, por lo general, los hombres enfocan la selección a parámetros relacionados con el rendimiento de las plantas y su resistencia a las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo.

Los concursos de platos alimenticios son otra de las tareas donde las mujeres fueron líderes: para la selección se estableció una prueba degustativa de todos los alimentos confeccionados resultando premiados los más populares entre los degustantes.

Sin lugar a dudas, las mujeres ocupan este espacio de la manera más participativa posible —sea en la capacitación, selección o en la organización de estos eventos—, asumiendo un papel protagónico.

Capacitación. Siempre se realizaron las capacitaciones en temas relacionados con el cultivo y en aspectos que los participantes mostraran interés en abordar.

En los talleres se expusieron las diversas atenciones culturales que los productores le realizaban al cultivo. Nosotros también expusimos las nuestras con un lenguaje poco científico y sin imponer un criterio, garantizando que la actividad funcionara lo más dinámica posible y que resultara un espacio propicio para establecer un de-

bate ameno con la idea de aprender todos de todos.

Se tocaron temas relacionados con el manejo de las semillas —la extracción, secado y almacenamiento para la conservación y uso de las mismas—, quedando constituidas las bases necesarias para mantener y utilizar los nuevos materiales que les fueron entregados y la diversidad genética con que contaban en sus fincas.

En algunas de las ferias, otro de los temas fue el uso de abonos orgánicos y el empleo de productos biológicos para el control de plagas y enfermedades del cultivo, siendo alternativas que ellos podrían desarrollar en sus fincas haciendo un mejor uso y conservación del ambiente y de los valores paisajísticos de la localidad.

Los niños. Trabajar con niños siempre resultó ser una tarea conmovedora e importante. Las experiencias fueron diversas, las edades también, pero se aprendió mucho con ellos. Los pequeños también contaron con el espacio para seleccionar variedades. Hicieron uso de la palabra en temas relacionados con la protección del ambiente, el amor a su localidad, a su tierra y al trabajo que protagonizan sus padres como productores de alimentos. Los juegos tradicionales cubanos y los cantos también nos acompañaron. Un mar de colores hizo gala de los dibujos confeccionados por ellos, una plástica relacionada con la naturaleza, la protección del planeta y de su amigo “el tomate” donde gana-

*Cuando la naturaleza
Por el invierno enfría
Nos sirve de compañía
Una ensalada en la mesa
Aquí cada cual empieza
A realizar su función
Y por la investigación
No será un disparate
Que mañana haya un tomate
Del tamaño de un melón*

Orlando Parra Sosa
(campesino de Batabanó)



Referencias

- Dueñas, F *et al*,
 "Los niños y las ferias de agrobiodiversidad, una vivencia en Cuba".
LEISA, Revista de Agroecología, 2004, vol. 20 núm. 2, pág. 20.22.
- Ríos, H. y J. Wright,
 "Primeros intentos para estimular los flujos de semillas en Cuba".
Boletín de ILEIA para la Agricultura Sostenible de Bajos Insumos Externos, 2000, vol. 15, núm. 3-4.
- Vernooij, R, *Semillas generosas: mejoramiento participativo de plantas*, 2003 Ottawa, Canadá. 1-103 pp.

Agradecimientos

Nos es muy grato agradecer a todos los organismos, instituciones y personas que de alguna manera han contribuido en la realización de este trabajo. Al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente de Cuba (CITMA), al Ministerio de la Agricultura de Cuba (Minagri), a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba (ANAP), a los Institutos de Investigación, por la facilitación de semillas de las variedades de tomates expuestas en las ferias de agrobiodiversidad realizadas.

Al proyecto Internacional de Fitomejoramiento Participativo en Cuba financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y al programa Agrópolis de Canadá por las ayudas y cooperaciones en la realización de este proyecto.

A las Universidades de las provincias de Granma y Camagüey y a la Universidad de Montaña del Municipio de La Palma en Pinar del Río por el trabajo de capacitación.

ron, sin dudas, en nuevos conocimientos, primando la alegría.

Pensamos que sembramos amor y los afianzamos más en su identidad cultural haciéndoles ver, cuan importante son ellos como futuros hombres y mujeres del mañana, que serán capaces de asumir el reto de conservar mejor este mundo, prestado de sus padres, para entregarlo a las próximas generaciones.

Espacios culturales. No faltaron los trovadores y las canturrias cubanas. En muchas ocasiones nos deleitamos con una buena décima y respiramos un ambiente de armonía y satisfacción. La comida criolla o la caldosa cubana fueron el manjar del festín de un arduo día de trabajo. Habíamos aprendido algo nuevo.

Los resultados. La participación directa de los agricultores y campesinos nos llevó a aplicar nuevos objetivos de mejoramiento en la obtención de materiales vegetales atendiendo a sus criterios y sugerencias. Los investigadores y científicos descubrimos la importancia de extender nuestro trabajo fuera del laboratorio o centro de investigación para beneficiarnos del conocimiento y la experiencia de los hombres y mujeres que viven más cerca de la tierra.

La adopción de nuevas variedades por parte de los campesinos y productores contribuyó al aumento de la biodiversidad del cultivo del tomate en estas localidades, brindando un abanico de variedades que pueden sembrar y explotar en sus parcelas sin dejar de utilizar los materiales que ellos anteriormente sembraban.

En algunas ferias el criterio de selección que empleaban los productores era muy similar al de los investigadores, lo que nos hizo pensar que los resultados de nuestros trabajos no estaban tan alejados de las necesidades de estas poblaciones.

La realización de las ferias de agrobiodiversidad creó, en estas localida-

des, un nuevo interés por seguir realizando estos eventos sociales en otras fincas o parcelas de aquellos campesinos y productores que estuvieran de acuerdo.

Se pudo palpar que los campesinos eran quienes tomaban las decisiones y se encargaban del diseño a emplear para sembrar los campos experimentales donde se realizaría la selección. Que son hombres y mujeres ávidos de capacitación, con muchas ganas de innovar y experimentar las nuevas metodologías en sus parcelas o fincas y con un conocimiento que resultó interesante para los investigadores.



Palabras finales. Sin lugar a dudas el proyecto reconoce y corrobora que cada día los investigadores tenemos que estar más cerca del campesinado que presenta una cultura quizás empírica pero rica en modestia y saberes del cultivo, lo cual permite un trabajo más conjunto, lo que favorece una retroalimentación positiva y garantiza que, en la pirámide de la investigación, el científico no trabaje alejado de las necesidades y el saber de estas personas. Aún falta mucho trabajo conjunto por hacer y la terminación de este proyecto constituye una inyección necesaria para explorar y trabajar en las nuevas puertas que se abren para el programa de mejoramiento del tomate donde, como complejo "llave-cerradura" investigadores y campesinos se dan la mano.

Bienes comunes y saberes locales

Vandana Shiva, directora de la Fundación de Investigación por la Ciencia, la Tecnología y la Ecología en Nueva Delhi India, publicó a fines de 2006 *Los bienes comunes de la Tierra* en su versión italiana. Presentamos fragmentos de una entrevista que le hicieron Tommaso Rondinella y Duccio Zola para *Il Manifesto*.

Lo que trato de poner de relieve son los procesos que generan una cultura de ‘exploabilidad’, fundada en la capacidad de disponer de

cios irrisorios por las grandes compañías transnacionales, que pueden así producir a precios reventados. Eso ocasiona migraciones masivas hacia las ciudades, provoca hacinamiento urbano y causa mayor inestabilidad.

El modelo neoliberal de globalización no es sino la dominación ejercida por instituciones supranacionales no democráticas, rehenes de unas pocas, poderosísimas, transnacionales. La distancia es un factor aislante. Por eso la práctica de la localización, de poner en el centro los intereses y las legislaciones locales, reviste una importancia fundamental.

genéticamente modificadas, causa la bancarrota de los pequeños agricultores, incapaces de sostener los costos y la concurrencia de esos métodos.

Sólo en 2004, 16 mil campesinos se quitaron la vida en India. Los suicidios de los campesinos pobres derivan del endeudamiento provocado por el aumento de los costos de producción y el desplome de los precios de los productos agrícolas. Los suicidios son resultado de una política agrícola que protege los intereses del capitalismo global e ignora a los pequeños agricultores. Por eso no hablo de suicidios, hablo de genocidio.

no puedan reproducirse y tengan que ser adquiridas cada año por los campesinos a precios elevados.

Las patentes de las semillas son propiedad de transnacionales como Monsanto, que de esta forma se apropian de las fuentes de vida y de los derechos de dos terceras partes de la humanidad.

Para hacer frente a esta situación, la red Navdanya (que significa “nuevas semillas”), con 300 mil agricultores afiliados, ha creado economías locales alternativas que controlan los procesos de producción y distribución de los alimentos y asesoran a los productores locales.

Los campesinos de esta red adoptan cultivos biológicos diferenciados que protegen la fertilidad de los terrenos y la biodiversidad, evitando el uso de fertilizantes químicos y pesticidas.

Al mejorar la productividad y el aporte nutritivo de las cosechas, llegan a recuperar hasta el 90 por ciento de los costos de producción. Las entradas son tres veces superiores a las de los agricultores que se sirven de productos químicos, no se generan subproductos tóxicos ni daños a la biodiversidad.

El sistema de comercio equitativo que regula la distribución de los productos protege de la inseguridad inherente a los mercados y de las especulaciones financieras. Cultivo orgánico y comercio equitativo, en cambio, ofrecen seguridad en el plano de las opciones alimentarias, de la salud y de la estabilidad.

Traducción: Leonor Març



todo y de todos porque a todo y a todos se les asigna un precio. Esa condición, económica y cultural altera la forma en que nos pensamos unos a otros, el modo en que nos relacionamos recíprocamente, y es la raíz de un sinnúmero de conflictos pues produce la idea de que se puede “usar y tirar” a las personas. Por todo el mundo oculta expropiaciones de tierra nunca antes vistas, y la tierra secuestrada es la de los pequeños campesinos, los más pobres. Las tierras son luego adquiridas a pre-

La localización permite asegurar la justicia y la sustentabilidad. Eso no significa que toda decisión tenga que tomarse a nivel local, sino que debe ser discutida y también aprobada a nivel local: las mejores decisiones se toman allí donde su efecto puede percibirse con mayor claridad.

Paralelamente, el desarrollo de la agricultura industrial, fundada en tecnologías costosísimas, en el empleo masivo de fertilizantes y pesticidas químicos y en la imposición de las semillas

Junto con las patentes que monopolizan los derechos de propiedad intelectual —introducidos por la OMC, el Convenio de Diversidad Biológica y otros acuerdos comerciales—, las biotecnologías reducen la diversidad de las formas de vida al papel de materia prima para la industria y los beneficios. Las semillas genéticamente modificadas encierran a los pequeños agricultores en una jaula de deudas y mentiras. Son “semillas del suicidio”. Se las hace estériles, a fin de que

Ingeniería genética extrema: informe del Grupo ETC

36 Recientemente apareció en castellano el informe *Ingeniería genética extrema: introducción a la biología sintética* del Grupo ETC. La biología sintética es el diseño y construcción de partes biológicas y sistemas que no existen en el mundo natural. Es también el rediseño de sistemas biológicos existentes para que ejecuten tareas específicas. Implica amenazas sociales, ambientales y armamentistas que rebasan todos los peligros y abusos posibles de la biotecnología.

Usando una computadora portátil, secuencias genéticas públicas y ADN sintético obtenido por correo, cualquiera tiene el potencial de construir de la nada genomas completos, incluidos algunos patógenos letales. Los científicos predicen que en el lapso de 2 a 5 años será

posible sintetizar cualquier virus. Actualmente, la biología sintética se encuentra en las manos de unas sesenta empresas que buscan controlar mediante patentes todos los desarrollos de esta convergencia tecnológica lucrando con la posibilidad de construir la vida desde cero.

Este informe delinea el nuevo paisaje de la biología sintética describiendo sus instrumentos, a algunos de los protagonistas principales y las varias aproximaciones de las cuales es pionera. Se describen también algunas de las aplicaciones emergentes de la biología sintética y las implicaciones que tiene para la seguridad bélica y civil, los monopolios, la justicia y la calidad de la vida.

Los entusiastas de la biología sintética insisten en que es la clave para producir biocombustibles baratos, remediar el cambio climático y encontrar la cura

de la malaria, además de resolver la limpieza de tóxicos y la producción farmacéutica y textilera. Se espera que los primeros productos comerciales de la biología sintética salgan al mercado en pocos años.

Entretanto, la “industria de la vida artificial” crece con tremendas inversiones privadas y públicas, en un entorno semejante al del Salvaje Oeste, de libertad total, sin ninguna supervisión regulatoria.

En el informe se reseñan cinco áreas importantes de investigación en biología de sistemas: fabricación de microbios mínimos; líneas de ensamblaje de ADN; construcción de células artificiales de abajo hacia arriba (la evolución Ersatz); la ingeniería de conductos o maquilas de microorganismos y la expansión del sistema genético de la Tierra: genética de formas ajenas.

Entre las implicaciones de la síntesis de ADN, se analiza

qué significa la biología sintética en términos de armas biológicas, cuál es la agenda de la energía sintética (biocombustibles); biología sintética y monopolio intelectual; posibles impactos de la síntesis de genes y del ADN digital en la conservación de los recursos genéticos y la política de la biodiversidad.

El informe incluye un estudio de caso sobre la artemisinina sintética: cómo es que la promesa de existencias ilimitadas de un medicamento para combatir la malaria (la artemisinina) se volvió la razón de ser de la biología sintética.

Descargable sin costo en formato PDF en <http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?id=603>
Para más información, comunicarse con:
Silvia Ribeiro
o Verónica Villa
grupoetc@etcgroup.org
teléfono: (52) 55 63 2664

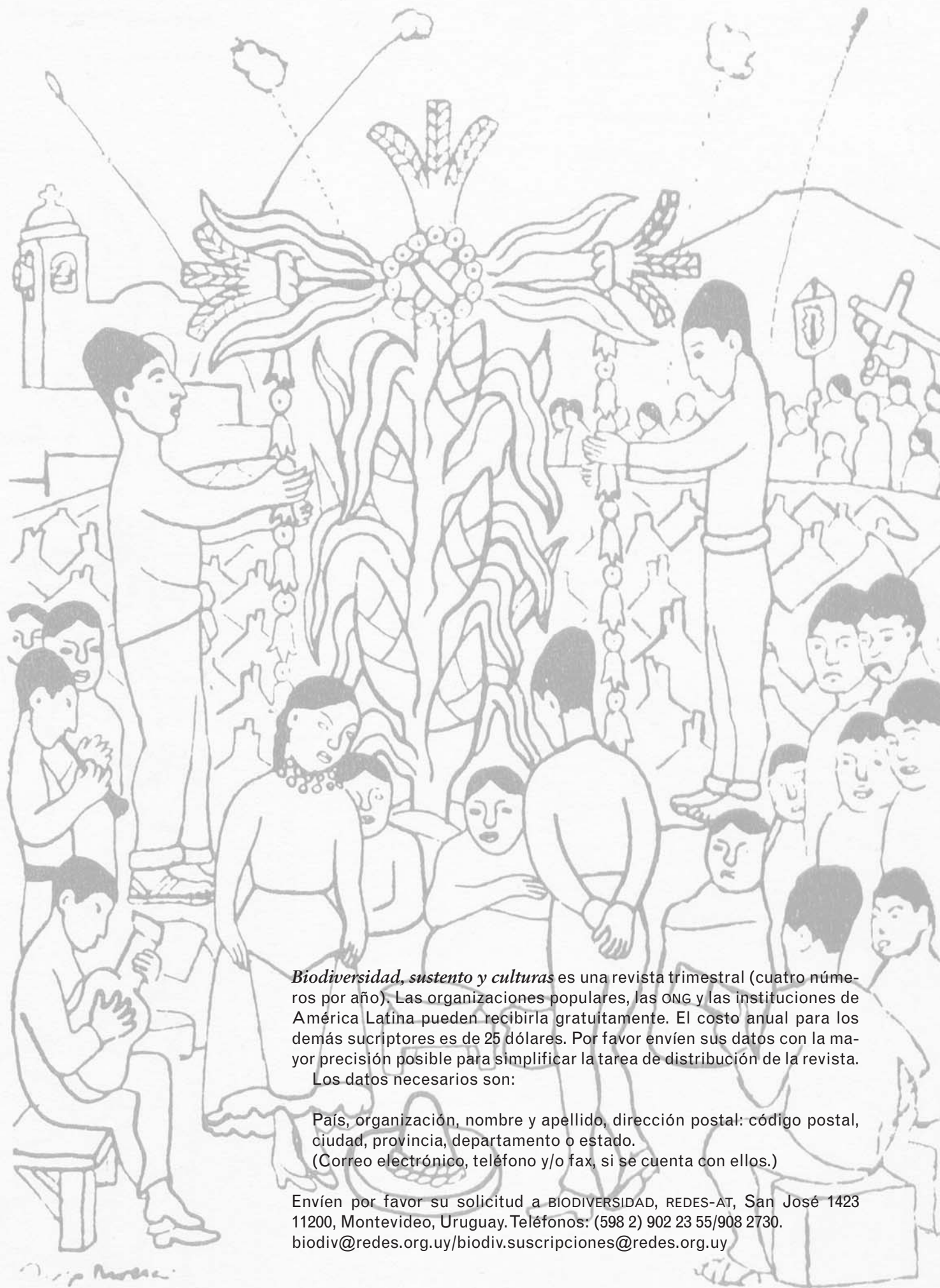
Monopolios artificiales y bienes intangibles

Gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Fundación Vía Libre acaba de publicar el PDF de su nuevo libro *MABI Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles*, herramienta de difusión sobre las principales problemáticas referidas a la privatización de la vida y el conocimiento a través de monopolios jurídicos y medidas de restricción técnica.

El libro —de distribución libre— consta de cinco capítulos en que diferentes personas y organizaciones describen y analizan los principales escenarios de las luchas políticas y jurídicas vinculadas a la privatización de la vida y el conocimiento, para finalizar con un capítulo dedicado a la convergencia de movimientos que integran estos diálogos sobre las patentes y otros monopolios sobre la vida, los derechos de autor, los impactos de la globalización en la cultura, los materiales educativos, los nuevos medios y la cultura *copyleft*, las bibliotecas populares y el acceso al conocimiento.

Esta publicación participaron GRAIN, Silvia Ribeiro del Grupo ETC, Susana Fiorito y la Biblioteca Popular Bella Vista, Pablo Vannini del Colectivo La Tribu, Werner Westermann de Educualibre, Sergio Cayuqueo de Futa Traw Gran Parlamento Indígena, Silvia Rodríguez Cervantes de la Universidad de Heredia, Costa Rica y la Red de Coordinación en Biodiversidad, junto a Enrique Chaparro, Federico Heinz y Beatriz Busaniche de Fundación Vía Libre.





Biodiversidad, sustento y culturas es una revista trimestral (cuatro números por año). Las organizaciones populares, las ONG y las instituciones de América Latina pueden recibirla gratuitamente. El costo anual para los demás suscriptores es de 25 dólares. Por favor envíen sus datos con la mayor precisión posible para simplificar la tarea de distribución de la revista. Los datos necesarios son:

País, organización, nombre y apellido, dirección postal: código postal, ciudad, provincia, departamento o estado.
(Correo electrónico, teléfono y/o fax, si se cuenta con ellos.)

Envíen por favor su solicitud a BIODIVERSIDAD, REDES-AT, San José 1423 11200, Montevideo, Uruguay. Teléfonos: (598 2) 902 23 55/908 2730.
biodiv@redes.org.uy/biodiv.suscripciones@redes.org.uy

